

Valparaíso, diez de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Se ha ordenado instruir estos autos criminales Rol N° 1-2016, seguidos ante este Ministro en Visita Extraordinaria de la Región de Valparaíso para el conocimiento y juzgamiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos, periodo 1973-1990, con el fin de investigar la existencia de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en la persona de Miguel Eduardo Flores Eloz, y establecer en su caso la responsabilidad que le correspondió a los procesados Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, cédula nacional de identidad N° 2.838.052-6, natural de Curanilahue, nacido el 30 de julio de 1930, casado, Suboficial Mayor de la Armada en situación de retiro, domiciliado en Pasaje Isla de Pascua N° 1088, Villa Alemana, actualmente condenado rematado en causas roles 948-2006 y 144.133-2013 seguidas ante este Tribunal; y Juan de Dios Reyes Basaur, cédula nacional de identidad 2.780.379-2, natural de Penco, nacido el 28 de abril de 1933, casado, Suboficial Mayor de la Armada en situación de retiro, domiciliado en calle del Villar N° 1189, casa N° 8, Condominio Coulín, Villa Alemana, actualmente condenado rematado en las causas 948-2006 y 144.133-2013 seguidas ante este Tribunal.

La investigación se inició por denuncia interpuesta por Miguel Eduardo Flores Eloz, dando cuenta de la detención, torturas y apremios que sufrió.

Por resolución de fojas 289 se sometió a proceso a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Juan de Dios Reyes Basaur y Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, como autores de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos, previstos y sancionados en el artículo 141 incisos primero y tercero, y 150, respectivamente, del Código Penal vigente a la época de los hechos.

A fojas 310 se declaró cerrado el sumario y a fojas 348 rola acusación fiscal en contra de los mismos procesados, como autores de los delitos ya referidos.

A fojas 367 rola escrito de la defensa de los acusados, representados por el abogado don Carlos Portales Astorga, en el que opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y contesta la acusación.

A fojas 398 se recibe la causa a prueba, y vencido el término probatorio se traen los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, se decretan medidas para mejor resolver y una vez cumplidas se traen los autos para fallo.

A fojas 534 se dicta sobreseimiento definitivo y parcial respecto al acusado Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, en virtud de la causal contemplada en el artículo 408 N° 5 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO:

DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PUNIBLES. -

PRIMERO: Que, en orden a acreditar los hechos materia de la acusación judicial ya reseñada, se han reunido los siguientes elementos de convicción:

1.- Declaración judicial de Miguel Eduardo Flores Eloz, de fojas 1, mediante la cual denuncia que a fines de agosto del año 1974, no recuerda fecha exacta, fue detenido en el Liceo Nocturno de Playa Ancha, en Valparaíso, por cuatro carabineros que vestían de civil, aproximadamente a las 21:00 horas; que en esa época tenía 20 años y cursaba cuarto medio; que al momento de ser detenido intervino el Director del Liceo, pero los carabineros le dijeron que era un simple control y que sería rápidamente liberado; que fue llevado al Cuartel Silva Palma en una camioneta doble cabina, iba sólo, le pusieron una venda al ingresar al recinto naval; luego lo conducen a una habitación tipo celda, medianamente grande, donde había más detenidos; que según pudo notar a través de la venda, había alrededor de diez camas y en ese lugar pasó la noche; que al otro día le ficharon, le tomaron fotos y le llevaron a una celda pequeña donde permaneció incomunicado; que desde ese lugar lo sacaron para llevarlo a una sala de interrogatorios, siempre vendado; le preguntaban por los demás integrantes del MIR, donde era militante; que ante la negativa a sus preguntas, le aplicaron corriente en diversas partes del cuerpo, recibiendo amenazas y golpes; que los interrogatorios duraron tres horas, esto se repitió alrededor de una semana, lo sacaban diariamente dos veces; que mientras estuvo incomunicado solo recibió pan y agua; que dentro de los interrogadores menciona a uno apodado "Taco de Goma" y "Romeo", al resto no lo recuerda; que para el 10 de septiembre de 1974 fue trasladado a una celda grande donde había muchos detenidos; ya no tenía la venda y podían tener comunicación entre ellos; que estuvo alrededor de tres días en esa celda grande y le trasladan a la Cárcel de Valparaíso, donde permaneció unos nueve meses; que desde ese lugar fue liberado bajo fianza, esperando el Consejo de Guerra por el cual fue posteriormente condenado, al parecer, a seis o nueve años de relegación, por los delitos de asociación ilícita e infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, que no recuerda el número de la causa que se siguió ante la Fiscalía Naval; que los detenidos Ángel Saldomando y Germán Santana estuvieron con él en el

mismo Consejo de Guerra por el cual le condenaron; que producto de las torturas quedó con secuelas serias en el oído y también afectado psicológicamente.

2.- Declaración judicial de Jaime Segundo Lazo Pérez, prestada a fojas 10, actualmente fallecido, quien expresa que en febrero de 1974 lo trasladaron a la Academia de Guerra Naval; que al llegar le dijeron que debía interrogar detenidos; su oficina estaba específicamente en el Cuartel Silva Palma y con los interrogatorios buscaban más que nada saber sobre la ubicación de armas, explosivos, grupos sediciosos y sobre posibles atentados a nivel nacional; que su Suboficial Mayor a cargo les traía el detenido, quien no venía esposado ni con signos de maltrato; que el detenido venía con una hoja con su nombre y con las preguntas que se le debían hacer; que una vez que ingresaba el detenido a la sala de interrogatorio, lo hacía encapuchado; que él mismo tomaba nota de lo que el detenido declaraba y luego le entregaba el documento al guardia que traía al detenido; que no aplicaban tortura o maltrato, ya que cuando ingresaron al Cuartel Silva Palma, lo primero que le señalaron es que era primordial el buen trato; no sabe qué sucedía con los detenidos después; se les interrogaba una vez; que los detenidos estaban en el tercer y cuarto piso de la Academia de Guerra Naval y luego eran bajados al Cuartel Silva Palma para ser interrogados; que su horario de trabajo era de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes; no le correspondió interrogar de noche, solo interrogó hombres, no mujeres ni niños o adolescentes; que terminó sus labores en julio de 1974 cuando lo trasladaron al Fuerte Vergara y en septiembre de 1974 lo llevaron a Santiago con el fin de recibir instrucción para asumir labores de guardia en la Embajada de Chile; que su apodo era "sunset"; que no conoce a nadie con los apodos de "taco de goma" o "Romeo"; no conoce a la víctima, además para septiembre de 1974 se encontraba en el extranjero.

3.- Declaración judicial de Bertalino Segundo Castillo Soto, rolante a fojas 14, en la cual señala que el día 28 de septiembre de 1973 lo trasladaron en comisión de servicio a la Academia de Guerra Naval; que lo recibió el Almirante Mac Kay, quien le informó que asumiría labores de interrogar detenidos; que los Infantes de Marina se desempeñaban en el segundo piso, mientras que el tercer piso estaba ocupado por personal de Carabineros e Investigaciones; que tanto la Infantería de Marina como Carabineros e Investigaciones tomaban declaraciones, pero solamente Carabineros hacía labores de detención, ya que solo ellos estaban autorizados por ley para hacerlo; que con los interrogatorios buscaban más que nada saber sobre la ubicación de armas, explosivos y sobre posibles atentados a

nivel nacional; su Suboficial Mayor a cargo les traía el detenido, quien no venía encapuchado ni esposado; tenía un ayudante que escribía lo que iba declarando el detenido al tenor de sus preguntas, luego se le pasaba la declaración para que éste la leyera y la firmara; que la declaración también señalaba que estaba tomada sin ningún tipo de tortura o presión; que el detenido era devuelto a su lugar de detención de forma normal; que no sabe si sus compañeros interrogaban con otros métodos, ya que solo se dedicaba a hacer su trabajo; que solo se interrogaba una vez al detenido; que cuando llegó a la Academia de Guerra Naval ya había detenidos políticos en el Cuartel Silva Palma, era gente común; que no conoció el Cuartel Silva Palma, solo salía de su oficina al exterior; que su horario de trabajo era de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes; que no le correspondió interrogar de noche; que el día 28 de diciembre de 1973 se devolvió a la Escuela de Infantería de Marina a cumplir funciones como instructor y no volvió más a la Academia de Guerra; que no conoce al “taco de goma” o a “Romeo”, posiblemente eran Carabineros; que no conoce a Miguel Flores, ya que para septiembre de 1974 se encontraba en el extranjero. Asimismo, rola declaración extrajudicial de Castillo Soto prestada en causa rol N° 144.133-2013 ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, a fojas 394 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 517 vuelta, quien señala que tras el 11 de septiembre de 1973, por orden del Departamento de Personal de la Primera Zona Naval, con el grado de Sargento 1°, fue trasbordado en comisión de servicio a la Academia de Guerra Naval, presentándose ante su director, oficial naval cuya identidad no recuerda; hace presente que en curso de fuerzas especiales con los UDT de Estados Unidos, recibieron instrucción respecto del tratamiento de los prisioneros de guerra; que por ese motivo, al llegar a la ACANAV fue designado para integrar un grupo de Infantes de Marina, divididos en cuatro salas de a dos personas, con la misión de interrogar a las personas que permanecían recluidas en el recinto, pertenecientes a los partidos políticos de la Unidad Popular, especialmente a los Partidos Comunista, Socialista, MIR, MAPU, con la finalidad de descubrir la tenencia de armas y/o explosivos; que, por las características de trabajo de inteligencia, no tuvo la ocasión de conocer la identidad de los oficiales encargados de los procedimientos; que personalmente él trabajaba con el también Sargento 1° Francisco Lagos Garcés (fallecido); que también recuerda, de otras parejas de interrogadores, a los sargentos Juan Reyes Basaur, Francisco Prado Espejo (fallecido), Jaime Lazo Pérez (fallecido) y Alejo Esparza Martínez; que todos ellos

estaban bajo el mando del Suboficial Mayor Manuel Leiva Valdivieso (fallecido); que los prisioneros eran trasladados a las salas de interrogatorio por Infantes de Marina que estaban a cargo de su custodia; que estas salas se encontraban en el tercer y cuarto piso de la ACANAV; que según el conocimiento que el declarante tiene, los detectives y los carabineros que trabajaban en la ACANAV eran los encargados de ubicar y detener a las personas y no participaban mayormente en los interrogatorios; que los prisioneros llegaban encapuchados y los interrogadores los sentaban en una silla, procediendo a realizar las preguntas que se le entregaban en un documento tipo formulario; que los interrogadores vestían de civil, formalmente y utilizaban nombres o apodos para llamarse entre ellos; que en su caso ocupó tres denominaciones: “judoca”, “Ronny” y “el choro”, para prevenir eventuales represalias; que, en general, todas sus preguntas se dirigían a averiguar la tenencia de armas y explosivos; que en esas labores se trabajaba en un horario de oficina de 8 a 12 y de 14 a 18 horas; que una vez finalizada su labor, entregaba el material manuscrito al Suboficial Mayor Leiva, quien lo hacía llegar a una oficina de partes o evaluación, ubicada en el primer piso, desde donde procedían las órdenes para interrogar y se resolvía la situación de cada detenido, luego del análisis de sus informes; que una vez concluido el trabajo con los prisioneros, avisaba por citófono a la guardia, quien disponía el traslado de éstos, ya sea al recinto de reclusión instalado en la ACANAV o en el Cuartel Silva Palma; que recuerda que algunos oficiales navales visitaban las salas de interrogatorios inspeccionando el procedimiento que se realizaba, sin intervenir en las preguntas que se realizaban; que entre estos oficiales recuerda al Teniente Riesco y al Segundo Comandante del Destacamento I.M N° 2 “Miller”, Capitán Abrego; que él permaneció en esta labor hasta diciembre de 1973, ya que fue destinado a Santiago para desempeñar funciones de seguridad en la Embajada de Chile en Colombia.

4.- Declaración judicial de Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, de fojas 24, actualmente fallecido, quien depone que para el año 1973 era instructor de guardiamarinas en el Buque Escuela Esmeralda, ahí se desempeñó hasta fines de septiembre de 1973, momento en que fue trasladado a la Academia de Guerra Naval, específicamente al SICAJSI, en el cual cumplía funciones que ordenaba ese servicio, como investigar, allanar, detener, etc.; que se encontraban en el segundo piso de ese edificio; que estuvo en esa repartición hasta noviembre del año 1974; que el 6 de enero de 1975 se presentó en la Escuela Naval y de ahí se desligó de cualquier labor de inteligencia: que no era interrogador ni le correspondió hacerlo,

sí presencié algunos interrogatorios, los que le interesaban; que los interrogadores eran personas calificadas, con cursos de instrucción en el extranjero y sabían hacer bien su trabajo; que este trabajo consistía en hacer presión psicológica en el detenido para que respondiera a las preguntas de los interrogadores, lo que se buscaba saber era su vinculación con algún hecho investigado, no sabe qué más preguntaban porque no era interrogador; que no recuerda haber visto gente amarrada en los interrogatorios, le correspondió ver interrogatorios con el detenido a cara descubierta y con la cara cubierta; que los interrogatorios se hacían en el Cuartel Silva Palma por personal de esa repartición; que no había maltratos ni aplicación de torturas, solamente se aplicaba presión psicológica para que respondieran lo que se les preguntaba; que sólo presencié interrogatorios de hombres, nunca de mujeres, niños o adolescentes, sí había mujeres detenidas, no había adolescentes detenidos, al menos no los vio; que respecto a la víctima de autos no recuerda su nombre, tampoco haber escuchado de alguien de los hechos ocurridos al señor Flores; que no recuerda a quién le decían “taco de goma” o “Romeo”.

5.- Declaración judicial de Jaime Erick Riesle Wetherby, de fojas 29, quien señala que para el año 1973 era alumno de ingeniería mecánica de la Escuela de Ingeniería Naval, ubicada en las Salinas en Viña del Mar, le derivaron a resguardar el perímetro de la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma; que mientras cumplía dicha labor estaban alojados en dependencias del Regimiento Maipo; que se trasladaron como compañía a hacer esa función y luego, cuando finalizaron los devolvieron a la Escuela también como grupo, esto fue aproximadamente los primeros días de febrero de 1974; que jamás participó en interrogatorios ni en la Academia de Guerra Naval ni en el Cuartel Silva Palma; que cuando le correspondía detener a alguien lo ponía a disposición de la guardia de la Academia de Guerra Naval; que las detenciones se efectuaban por orden escrita, firmada y timbrada, la cual se le exhibía a la persona; que se le llevaba generalmente vendada y no esposada, en la pick up de la camioneta; que no le tocó algún detenido que se resistiese, por lo que nunca se aplicó alguna forma de coerción; que no presencié interrogatorio alguno, ya que tenían restringido el acceso a la Academia de Guerra Naval; que respecto a la víctima de autos, ya no cumplía funciones en el exterior de la Academia de Guerra Naval, por lo que no sabe nada al respecto ni tiene participación; que en el Cuartel Silva Palma, cuando comenzaron a llegar los detenidos civiles, el cuartel tuvo que habilitar un galpón,

solo tiene conocimiento que en ese galpón estaban reclusos los hombres y en las celdas estaban las mujeres.

6.- Declaración judicial de Gilda Mercedes Ulloa Valle, de fojas 39, quien expresa que en abril del año 1974 fue trasladada al SICAJSI, en el edificio de la Academia de Guerra Naval, 4° piso, estuvo hasta diciembre de 1976; que no participó en interrogatorios, su trabajo era administrativo; que tampoco presencié interrogatorios, nunca estuvo en el Cuartel Silva Palma; que no conoce a los interrogadores y no conoce a la víctima.

7.- Declaración judicial de Alejo Esparza Martínez, de fojas 42, quien expresa que para el año 1973 era profesor e instructor de la Escuela de Infantería de Marina, que en septiembre de 1973 fue trasladado a Casablanca a realizar funciones de patrullaje; que la primera semana de octubre de 1973 lo trasladan al Cuartel Silva Palma, en ese tiempo era Cabo, estuvo hasta aproximadamente el primer semestre de 1974, desempeñando funciones de interrogador; que sabe que en la Academia de Guerra Naval había personal de Carabineros e Investigaciones y del Ejército; que con los interrogatorios buscaban más que nada saber sobre la ubicación de las armas, explosivos, de qué grupo político era, si sabía de quiénes estaban realizando actos contra el gobierno y sobre posibles atentados a nivel nacional; que el guardia les traía el detenido, quien no venía esposado, ni con signos de maltrato, sólo con una venda en los ojos; que el Suboficial a cargo, Manuel Leiva, traía una hoja de pauta con las preguntas a hacer al detenido; que al momento de prestar la declaración se le tomaba los datos personales y se le hacían preguntas; quedaba todo escrito y se le hacía firmar la declaración al detenido; que al detenido se le daba una categoría: 1, 2 y 3, dependiendo a si quedaba libre inmediatamente o no; que llegaba mucha gente por denuncias falsas y esa gente era liberada inmediatamente; que no aplicaban ningún tipo de tortura ni sistema violento, ya que eran compatriotas, que estaban en bandos o lados distintos; que el detenido era interrogado con capucha por una orden superior, en la cual ellos como interrogadores no podían intervenir; que cumplían funciones vestidos de civil; que recuerda que sólo lo interrogaban una vez, pero era perfectamente posible que se interrogara a alguien más de una vez; que su horario de trabajo era de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes; que solo interrogaban hombres, nunca mujeres, niños o adolescentes; que si llegaban adolescentes lo primero que hacían era dejarlos en libertad; que no recuerda a quien le decían “taco de goma” o “Romeo”;

que respecto a la víctima de autos no recuerda su nombre ni que haya sido interrogado por él.

8.- Declaración judicial de Eduardo Mauricio Núñez Contreras, que rola a fojas 47, quien indica que antes del año 1989 se llamaba Tuba Rosa Núñez Contreras; que se desempeñaba como instructor de la Escuela de Infantería de Marina de Viña del Mar hasta el momento en que ocurre el accidente, en el cual muere un Oficial de la Armada, por el cual se le acusa de cuasidelito de homicidio, siendo declarado reo el 22 de mayo de 1973, para septiembre de 1973 estaba detenido en el Cuartel Silva Palma, la cual servía de cárcel para los funcionarios de la Armada que cometían algún delito o falta; que luego del día 11 de septiembre de 1973 los trasladan a un buque al Molo de abrigo; que en julio de 1974, su situación judicial queda esclarecida, ya que la Corte Marcial lo absuelve, volviendo a sus funciones a la Escuela de Infantería de Marina; que a fines de 1974 fue trasladado a la Primera Zona Naval, (PRIZONA) y luego derivado a la Academia de Guerra Naval, ahí fue asignado a una patrulla con un Suboficial a cargo y personal de Carabineros e Investigaciones; que sus funciones consistían en patrullar el cordón industrial para controlar la posible instalación de tomas y trasladar detenidos desde la comisaría hasta el Cuartel Silva Palma, nunca detuvieron personas ni hicieron allanamientos, ocupaban un Peugeot 404; que entregaban a los detenidos a la guardia del Cuartel Silva Palma, no sabía que más podía suceder con los detenidos; que estuvo cumpliendo funciones en la Academia de Guerra Naval hasta febrero de 1977 ya que luego vuelve al Cuerpo de Infantería de Marina debido a los problemas limítrofes que tenía Chile con Argentina; que no era interrogador, tenía prohibido ingresar a las dependencias del Cuartel Silva Palma; que le tocó trasladar detenidos hombres y mujeres; que no recuerda el nombre de la víctima de autos; tampoco recuerda a quien le decían “taco de goma” o “Romeo”.

9.- Declaración judicial de Carlos Francisco Alfonso Líbano Riquelme, de fojas 67, quien indica que después del 11 de septiembre de 1973 le derivan a la Academia de Guerra Naval, desempeñándose como chofer de una camioneta, le correspondía salir a operativos que comandaba el oficial Bidart, que consistían en ir a notificar gente, él se quedaba en la camioneta cuidándola; no le correspondió llevar gente detenida, sabe que se detenían personas pero no participó; que llegaba hasta el patio de la Academia, se quedaba en la camioneta hasta que le llamaran nuevamente; no ingresaba al edificio porque no se podía entrar ahí; que desconoce

quiénes estaban a cargo del edificio de la Academia de Guerra Naval; que estuvo un tiempo en la Academia de Guerra Naval, unos meses, no puede precisar la fecha, luego le trasladaron a Talcahuano; que no sabe quién es la víctima. Asimismo, rola declaración extrajudicial de Carlos Francisco Alfonso Líbano Riquelme, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013, tenuta a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 539 de esos autos, cuya copia se encuentra a fojas 493, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que para el 11 de septiembre de 1973 fue designado al Cuartel Silva Palma, quedando en una dotación de cuatro a cinco personas en una patrulla para realizar solamente detenciones de personas, siendo su jefe directo el Teniente Segundo Sergio Bidart González. Sobre los otros integrantes de la patrulla, no puede recordar sus nombres, pero uno de ellos, empleado civil filiación azul, tenía junto al declarante a cargo la conducción de la camioneta asignada a la patrulla, de marca Chevrolet modelo C-10 color blanco. En algunos casos el teniente Bidart salía manejando la camioneta, en ese caso los conductores se quedaban en el cuartel y el teniente salía con su gente. El teniente Bidart recibía órdenes escritas de detención de personas que eran emitidas desde la Academia de Guerra Naval, presume que del SICAJSI y con la patrulla salían todos vestidos de uniforme de mezclilla color verde y botas negras y casco color verde. Cumplían detenciones principalmente en los cerros de Valparaíso y ocasionalmente en Viña del Mar. Los detenidos los trasladaban hasta la Academia de Guerra Naval y los entregaban a la gente de guardia, luego se retiraban ya que tenían prohibición de pasar a la zona de interrogatorio, que eran tanto en la Academia como en el Cuartel Silva Palma.

10.- Declaración judicial de Juan Orlando Jorquera Terrazas, de fojas 78, actualmente fallecido, quien señaló que para septiembre de 1973 hacía clases en la Academia de Guerra Naval ya que era instructor, y pasó a asumir labores de interrogador; que ocupaba el segundo piso de la Academia de Guerra Naval, aunque también iba al Cuartel Silva Palma; que cumplía sus labores junto a otros compañeros que llegaron desde Estados Unidos, en San Diego, California, donde hicieron unos cursos de Infantes de Marina y les enseñaron técnicas de interrogatorio; que sus compañeros eran Bertalino Castillo, Juan Reyes Basaur, Manuel Leiva, Francisco Prado, entre otros, no recuerda sus apodos; que antes que terminara el curso en EEUU los profesores les maltrataron físicamente y les aplicaban torturas como modo de aprendizaje; que les dieron un tiempo para

descansar antes de volver a Chile; que tenía que verificar acusaciones que los detenidos civiles hacían en contra del personal de la Armada que los detenía e interrogaba ya que estos señalaban que eran víctimas de tortura; que tenía que verificar esto con los acusados e interrogarlos para dilucidar si esto era cierto; que la mayoría de las veces eran acusaciones falsas; que aparte de hacer las averiguaciones correspondientes debía dar instrucción a los efectivos que eran acusados para que interrogaran correctamente, ya que era alta la cantidad de detenidos, que el personal calificado no daba abasto; que también le tocó interrogar civiles detenidos, que estaban en contra del gobierno militar, pero jamás torturó; que no los interrogaban a todos, pues primero se hacía un coladero y solo se interrogaba a aquellos que tenían participación efectiva en hechos contrarios al gobierno; que había personas de la Armada que en los interrogatorios se sobrepasaban con los detenidos; que a esas personas se les sacaba de esas funciones; que los interrogatorios en el Cuartel Silva Palma duraron hasta el año 1974; que recuerda que en el último tiempo que él estuvo, aparecieron mujeres que interrogaban, quienes estaban cuando había que interrogar mujeres; que recuerda una que tenía el pelo rojo, a quien le llamaban "Tatiana"; que no conoce a Miguel Flores Eloz; que no le suenan los apodos "taco de goma" o "Romeo"; que había interrogadores que hacían cosas malas. Asimismo, Jorquera presta declaración extrajudicial en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 512 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 513 vuelta, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que para el año 1973 era de dotación de la Escuela de Infantería de Marina, donde se desempeñaba como instructor y tenía subespecialidad de comando I.M.; que a fines de septiembre de 1973, fue designado en comisión de servicio a la Academia de Guerra Naval, al presentarse le indicaron que su función sería proceder a interrogar a personas que llegaran detenidas al Cuartel Silva Palma, recinto colindante a la Academia de Guerra Naval, pero no recuerda quién le dio dicha orden; que pasó a integrar un grupo especial de Infantes de Marina que tenía la tarea de interrogar al interior de la ACANAV, entre ellos recuerda al Suboficial Leiva, los sargentos Francisco Pardo, Juan Reyes, Francisco Lagos, Jaime Lazo, Bertalino Castillo y Valentín Riquelme, todos vestían de civil y se identificaban con nombres supuestos o apodos; que para cumplir con la misión de interrogador se trasladaba hasta las dependencias del Cuartel ya que con antelación era un recinto de reclusión de personal naval con

problemas procesales o disciplinarios; que posteriormente procedía a identificar a los detenidos y seguidamente los interrogaba acerca de su vinculación política y si estaban involucrados en ciertos hechos constitutivos de delito que habían ocurrido en la época, para tales efectos recuerda que se les leía un cuestionario tipo; que todos los antecedentes acerca de las respuestas que los detenidos les daban las anotaban en una hoja, pero no recuerda cuál era su destino; después esa ficha era analizada, pero desconoce quién tenía esa labor; que cabe señalar que, dependiendo del análisis en cuestión, en donde se analizaba si estaba involucrado o no en los hechos por los cuales se le interrogaba, era dejado en libertad posteriormente; que los interrogatorios eran efectuados al interior de unas oficinas de material ligero, que estaban ubicadas frente a un patio al interior del Cuartel Silva Palma; que en su interior se instaló un escritorio y un par de sillas; que luego cuando se ingresaba un detenido, se le consultaban unas preguntas consignadas en el cuestionario tipo y nunca en dichos procedimientos procedió a maltratar, golpear, torturar, ni apremiar a ninguno de los detenidos y no tiene conocimiento que se haya realizado; que sabía que en el tercer y cuarto piso de la ACANAV también se llevaron a cabo interrogatorios de personas detenidas, pero nunca participó ni presenció alguno de ellos y quienes intervinieron, ignora si ellos eran parte del grupo especial al que él pertenecía; que en cuanto a los oficiales que se le nombran en el momento de la declaración y que habrían cumplido funciones en la ACANAV, solo recuerda a un Teniente Ricardo Riesco, quien era Infante de Marina, jefe del grupo de los interrogadores del Silva Palma, no recuerda haberlo visto presenciando los interrogatorios, solo en ocasiones transitaba por las dependencias del cuartel Silva Palma, de los demás oficiales desconoce sus nombres.

11.- Declaración judicial de Héctor Vicente Santibáñez Obreque, de fojas 121, quien señala que a inicios de octubre de 1973, empezó a pedir que le trasladaran a Valparaíso, por lo que a mediados de octubre llegó a la Escuela de Infantería de Marina; que le enviaron inmediatamente a la Academia de Guerra Naval a presentarse con el Comandante Hernán Soto-Aguilar; que lo enviaron como paciente al Hospital Naval, haciéndose pasar por extremista detenido para averiguar el nombre de una persona que estaba hospitalizada, por lo que le ingresaron a la misma sala donde estaba esta persona; que ahí estuvo más o menos diez días; que le tenían con una venda en toda la cara, porque era arriesgado que algún enfermero le pudiera reconocer; que cuando le fueron a buscar, le

encapucharon, le tironearon, le tiraron en una camioneta y le llevaron a la Academia de Guerra Naval, ahí lo recibió el Suboficial Leiva; que pidió hablar con el Comandante Soto-Aguilar, a quien le pidió unos días de permiso para ver a su familia, porque desde que llegó de Santiago le mandaron directamente a esa comisión y estuvo como una semana con permiso; que cuando regresó a trabajar le asignaron con el Sargento Carlos Ponce, a quien apodaban el “Capellán”, con quien fue dupla para interrogar; que su chapa era “Aníbal”; que a fines de 1974 le asignaron una dupla con Francisco Prado, de quien desconoce su apodo; que le apodaban “Manco” en la Escuela de Infantería de Marina, porque se quebró el brazo haciendo judo; que quien les asignaba las personas para interrogar era el Suboficial Leiva; que el Suboficial Leiva rondaba en todos los cubículos de interrogatorio para cerciorarse de cómo estaban llevando a cabo esta función; que les recalcaba que no debían maltratar a los detenidos porque eran personas y tenían familias; que desconoce lo que pudiesen hacer Carabineros o Investigaciones con los detenidos; que el interrogatorio de mujeres se lo asignaban a dos o tres carabineras que había ahí; que aparte de Carabineros, también había personal de la Policía de investigaciones que también interrogaba; que nunca interrogó mujeres ni menores de edad; que le tocaba interrogar personas de todo tipo; que se recuerda de una persona que era dirigente del Partido Comunista de Quilpué, que supo que a la hora después fue dejado libre; que generalmente preguntaban por la organización, las redes que pudieran tener, escondite de armamento, las casas de seguridad y los planes de emboscada o atentados; que hacían estas preguntas en base a los antecedentes que el Suboficial Leiva tenía; que desconoce por qué le llamaban al lugar el “palacio de la risa”; que no recuerda los apodos “Romeo”, “Taco de Goma” o “Tribilín”; que Reyes era el “Telémaco”; que con Ponce hacían un acercamiento psicológico con el detenido como método de persuasión, hacían sentir tranquila a la persona, que entrara en confianza y si no contestaba o contestaba cosas que no correspondían, se le advertía que mejor hablara con ellos porque después no sabía con quién le tocaría el próximo interrogatorio; que devolvían al detenido a la guardia y le pedían al Suboficial Leiva que le diera una nueva persona; que con Ponce nunca les tocó interrogar afuera del Cuartel Silva Palma, ni en la Academia de Guerra Naval; que estuvo en funciones hasta mitad de febrero de 1975, cuando lo trasladaron a la Academia de Guerra Naval al curso de Oficiales; que en la cadena de mando que seguía al Suboficial Leiva, estaban el Teniente Riesco y el Comandante Soto-Aguilar; que

respecto a Miguel Flores Eloz, atendida la fecha en que fue tomado detenido, en septiembre de 1974, no se encontraba en funciones en el Cuartel Silva Palma, ya que se encontraba realizando el curso de inteligencia en la localidad de Nos, Región Metropolitana.

12.- Declaración judicial prestada en causa rol 335-2017 por Marcelo Alejandro Onofre Vargas Goas, cuya copia rola a fojas 165, quien expresa que siendo funcionario de Carabineros pasó de agregado en Comisión de Servicio al SICAR el 12 de marzo de 1974, lo cual aparece en su hoja de vida; manifiesta que el SICAR prestaba apoyo al SICAJSI, su jefe era el Mayor Hernán Trobok, quien era el Mayor Comisario en la Tercera Comisaría Puerto; que generalmente por las funciones que realizaba pasaba gran parte del tiempo en la calle, pero las oficinas del SICAR estaban en el primer piso de la Academia de Guerra Naval; que le correspondió diligenciar una orden amplia de investigar proveniente de la Fiscalía Naval de Valparaíso, para investigar la vinculación del tráfico de drogas, en agosto de 1974 se casó y fue trasladado como jefe de Tenencia a Puchuncaví; que él era Jefe del "Zorro 2", reemplazando al Teniente Nelson López Cofré; que mientras él estuvo, su unidad no cumplió ninguna orden que no fuera diligenciar esta investigación por tráfico de drogas; que no cumplió ninguna orden de detener o allanar por motivos políticos; que utilizaba una camioneta Chevrolet C-10 celeste con patente argentina; que antes habían tenido un Fiat 125 color gris, mismo auto que dejó el Teniente Cofré, y luego un impala año 1967 color azul brillante.

13.- Declaración judicial prestada en causa 335-2017, por Héctor Nelson Tapia Olivares, cuya copia se agregó a fojas 168, señalando que a fines de octubre o principios de noviembre de 1973, el Comandante Castro le ordenó que pasara como agregado a la Décima Comisaría al mando del mayor Héctor Trobok Silva; que se presentó al Mayor, en una pequeña oficina que tenían en la Academia de Guerra Naval y se integró a una patrulla con dos suboficiales más, después se enteró que el 4 de octubre de 1973 por orden de la Subdirección General, mediante el Criptograma N° 6 se le había designado para crear y formar una unidad de Contrainsurgencia; que en las mismas condiciones se presentaron en ese tiempo los Tenientes Ángel Lorca, Marcelo Vargas y otro de apellido Díaz Vieira, entre los que se acuerda; que ellos también conformaban sus propias patrullas, ellos llegaron agregados al mismo tiempo que él; que respecto a los nombres que tenían sus patrullas, era más bien algo interno que tenían; para poder comunicarse por radio utilizaban la Z, que generalmente usaban los vehículos de Carabineros, y

tenían como broma interna el llamarse “Zorros” porque consideraban que el Mayor Trobok tenía astucia para relacionarse con los marinos; que estando en esa unidad empezó a cumplir los servicios que le comunicaba a su ayudante, el Subteniente Ricardo Araya, relacionados con control de toque de queda, comprobación de reuniones o acciones prohibidas por las autoridades, procedimientos ordenados por la central de radio y ubicación de dirigentes del gobierno depuesto, requeridos por las nuevas autoridades por bando militar, lo cual implicaba detención; que no detuvo a nadie, sí efectuó tres allanamientos; que había dos tipos de detenidos, los detenidos por toque de queda y los detenidos por orden de la autoridad; que en el caso de los primeros, estos eran llevados a una unidad policial, en el caso de los segundos, estos eran dejados en la puerta de la Academia de Guerra Naval al personal de guardia de la Armada; que no tenían contacto con el Cuartel Silva Palma; que permaneció en el SICAJSI hasta agosto de 1974, cuando le mandaron a la Primera Comisaría Sur y el 4 de febrero de 1975 le trasladaron a Santiago.

14.- Declaración judicial de Guillermo Ricardo Sebastián Montero Triviño, de fojas 185, quien expresa que se desempeñaba como funcionario de la Armada; que el 21 de marzo de 1974 se presentó en la Primera Zona Naval, siendo enviado al SICAJSI, presentándose el 25 de marzo ante el jefe Sergio Fuenzalida Vigar, y estuvo de dotación hasta el 8 de abril, siendo redestinado al Estado Mayor de la Primera Zona naval y en octubre de 1974 se embarcó en la barcaza Hemmerdinger hasta enero de 1975; que estuvo dos semanas en el SICAJSI, sus funciones consistían en estar asignado al Cuartel Silva Palma en tareas de vigilancia del recinto, y adicionalmente se realizaban operativos en el exterior cuando se promulgaba alguna orden desde la Academia de Guerra Naval; que eran operativos de apoyo a las investigaciones, allanamientos, detenciones, observación de domicilios, y patrullajes, esto se hacía cuando llegaba una orden de la Academia; que el jefe del Cuartel Silva Palma era el Capitán Santa Cruz, quien disponía de los equipos y durante la noche se cumplía el operativo y al día siguiente se informaba los resultados; que él no efectuó operativos ni allanamientos, solo hizo guardias y vigilancia del recinto, supervisar los centinelas, llevarles café, verificar lugares ciegos en el perímetro de la Academia de Guerra Naval; que ambas dependían del jefe del SICAJSI, tanto la Academia como el Cuartel Silva Palma; que estuvo como custodio del recinto; que había un grupo especial monitoreado por Santa Cruz, eran de todas las especialidades, Cabos,

Suboficiales, que tenían acceso a los detenidos; que veía que había dos grupos separados; que tenían prohibido tener contacto con los detenidos; que los grupos que investigaban los casos estaban facultados para detener a las personas; que los investigadores usaban otros nombres y los que investigaban trabajaban en la Academia de Guerra Naval; que tenían que vestir tenida verde como los Infantes de Marina; que los detenidos estaban en una estructura tipo gimnasio en el Cuartel Silva Palma; que había un galpón con oficinas en su interior, al cual no ingresó porque estaba vedado para ellos, pero entiende que había salas de interrogatorio; que las salas de interrogación estaban abajo, en las oficinas de interrogatorio en enfermería también; que debió haber habido unas 60 o 100 personas detenidas en el patio, los vio en el patio sin venda, ninguno estaba lesionado, conversaban y caminaban; que había comentarios externos acerca de los apremios que sufrían en los interrogatorios de los detenidos, pero no le consta; que después de terminar las funciones en el SICAJSI, le enviaron como encargado de la oficina Ancla II Primera Zona Naval, pero siguió vinculado al SICAJSI, ya que fue solicitado para continuar laborando con los guardias nocturnos del cuartel; que no cumplió funciones como interrogador ni aprehensor.

15.- Declaración judicial de Patricio Fernández Josse, quien a fojas 313 señala que en febrero de 1974 lo trasladaron al SICAJSI PRIZONA, se hizo cargo del departamento de apoyo administrativo, que veía las fichas y carpetas, tanto de personas detenidas como de organizaciones y de funcionarios de la institución; que no hacía trabajo de análisis, solo de orden; que estuvo ahí hasta diciembre de 1974 o principios de enero de 1975, porque se casó, y luego se fue a un curso de especialidad en telecomunicaciones; que luego se fue a cursar a la Escuela de Operaciones; que los detenidos por el SICAJSI quedaban en el sector del Cuartel Silva Palma; que no había un contacto con personas en específico que se les entregara o requiriera esos archivos, sino que cualquiera que pertenecía a la estructura del SICAJSI podía pedirlos; que su jefatura directa era el Capitán de Corbeta Juan Mackay Barriga; que no presencié interrogatorios, recuerda que por comentarios se hablaba que éstos se hacían profesionalmente, no había maltratos físicos; que recuerda que en el SICAJSI había personal de otras reparticiones como Carabineros o la Policía de Investigaciones; que estuvo desde febrero de 1974 hasta diciembre de 1974 en la Academia de Guerra Naval, pero no en el Cuartel Silva Palma, porque era independiente orgánicamente; que no realizó funciones de aprehensor; que sabía que el departamento de operaciones era el que realizaba las

detenciones, ubicado en la misma Academia, en el tercer piso, siendo su jefe el Comandante Mac Kay; que sabía que había un grupo de funcionarios que cumplían la función de interrogar a los detenidos, y que eran de todas las ramas, pero no sabe sus nombres; que Ricardo Riesco era el jefe del Departamento de Operaciones, esta persona le enviaba a través de sus ayudantes las declaraciones y antecedentes que se les tomaban a los detenidos en el Cuartel Silva Palma; que no recuerda si eran de hombres y mujeres, pero cree que por lógica debió ser así; que no le fue asignada ninguna identidad operativa ni tenía apodo; que le extraña el encarcelamiento sin motivo legal que sufrió la víctima de autos, porque pensaba que se hacían procedimientos judiciales.

16.- Declaración judicial de Werner Watchendorff Latournerie, de fojas 257, quien expresa que en enero de 1974 se le asignó una tarea de control periférico del Cuartel Silva Palma, es decir, el control externo del cuartel; que no tenía contacto con los detenidos ni con los interrogados; que su misión era exclusivamente la seguridad del cuartel; que no sabía quiénes eran los interrogadores del Cuartel Silva Palma, mejor dicho no sabía que existieran; que el Capitán Santa Cruz le dio instrucciones de no involucrarse en otras funciones que no fueran las exclusivamente asignadas; que recuerda que había un galpón al cual nunca ingresó donde entraban los detenidos; que no participó en el Servicio de Inteligencia; que no conoció al “Taco de Goma” o al “Romeo”; que a la fecha de detención de Miguel Flores Eloz ya no estaba en el Cuartel Silva Palma, ya que fue trasbordado a retomar el curso en la Escuela de Ingeniería Naval el 8 de julio de 1974.

17.- Copia de declaración extrajudicial de Sergio Manuel Barra Von Kretschmann prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013, tenuta a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 305 de esos autos y cuya copia se encuentra a fojas 489, actualmente fallecido, quien señala en la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que después del 11 de septiembre de 1973, siendo Subdirector de instrucción de la Armada, fue derivado por el Almirante Merino como Jefe del SICAJSI, teniendo dependencia directa del Contraalmirante Walbaum y excepcionalmente se entendía con el Capitán de Navío Aldoney; que a inicios de 1973, el Jefe de la Primera Zona Naval de ese entonces, el Almirante Merino, le ordenó confeccionar un plan defensivo, el que denominó “Plan Cochayuyo”; que una vez como Jefe del SICAJSI instruyó a su personal que se abocara a mantener la seguridad interior y el orden público de la ciudad; que ordenaba detener a las personas vinculadas a la subversión, militantes

del MIR; que recuerda a Rigoberto Cruz Johnson como uno de los asesores en el SICAJSI; que en esa misma causa penal, rola otra declaración extrajudicial de Sergio Manuel Barra Von Kretschmann, rolante a fojas 478 de esos autos, quien señaló que el día 11 de septiembre de 1973 se encontraba realizando labores en la Dirección de Instrucción; que tiempo después, en el mes de octubre, fue destinado como Director de la Academia de Guerra Naval, alojó a detenidos en el tercer piso del edificio, hasta cuando ya no cabía más personas por problemas de hacinamiento; que por lo mismo, solicitó trasladar a los detenidos a otra repartición, siendo remitidos al buque mercante Lebu; que en la Academia de Guerra Naval no se realizaban labores de inteligencia, ni había grupos operativos, había eso sí, grupos no subordinados a él de distintas instituciones que trabajaban en la ACANAV, no recordando a qué se dedicaban; que respecto al grupo de la Armada que trabajó en estas labores, eran funcionarios operativos, no de inteligencia ni de análisis; que este grupo estaba conformado por quince o veinte hombres; que señala haber tenido un segundo Comandante que estaba a cargo de las funciones operativas.

18.- Declaración extrajudicial de Franklin González Rodríguez prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013, tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 307 de esos autos, cuya copia se encuentra a fojas 490, actualmente fallecido, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que en 1972 se encontraba haciendo el curso de Estado Mayor y en julio de 1973 el mando institucional dispuso el traslado a la Primera Zona Naval de todos los que estaban en el curso de Estado Mayor, esto con el objeto de confeccionar un plan defensivo contra la subversión y el terrorismo por las constantes amenazas de ataques a las reparticiones de las Fuerzas Armadas. A este plan le dieron el nombre de “Plan Cochayuyo” y la misión de quienes participaron de este plan fue recopilar información del “enemigo”, es decir, de las células subversivas y de extrema izquierda. El jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, el Capitán de Navío Aldoney, lo designó para recopilar esa información, cuya labor no fue difícil, ya que los subversivos manifestaban abiertamente su postura y otras personas contribuyeron voluntariamente con información. Luego fue aprobada la Ley de Control de Armas, y el Juez Naval, que era el mismo Almirante Merino, dio la orden de efectuar allanamientos en la Zona; el declarante ostentaba el grado de Capitán de Fragata, junto a los oficiales Rigoberto Cruz Johnson y Erwin Conn Tesche,

continuando los tres siendo dotación de la Primera Zona Naval, debiendo seguir con la elaboración de programas de análisis e inteligencia para combatir la subversión. En reemplazo del Almirante Merino, quien asumió el mando de la institución fue el contraalmirante Walbaum. El jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval era el Capitán de Navío Aldoney. Los Oficiales Cruz y Conn también fueron destinados a la Academia de Guerra Naval. Después del pronunciamiento militar sus fuentes de información eran abiertas, pero más escasas. Su función fue hacerse cargo de la Inteligencia Naval, denominada Ancla II, que en un comienzo estuvo formada por un grupo reducido de personas. Durante los primeros días tuvo que ir a Santiago, y de regreso a Valparaíso, el Capitán de Navío Aldoney le ordenó trasladarse a la Academia de Guerra Naval donde se hizo cargo de la parte administrativa del SICAJSI, para ordenar su funcionamiento. El jefe del SICAJSI, el Capitán de Navío Barra Von Kretschmann le ordenó hacerse cargo de un equipo destinado a la revisión de información que se recibía de la gente operativa, asimismo, recibía la nómina de los detenidos. De todo su trabajo le daba cuenta directa al comandante Barra. La Academia de Guerra Naval fue destinada como centro de detención, por lo que se fijó un régimen interno del que también se hizo cargo. A toda persona, previo a la confección de una ficha con sus antecedentes, se le bajaba al Cuartel Silva Palma para ser interrogada por el personal que cumplía dicha función. A cargo de este cuartel estaba el Capitán de Corbeta Abel Osorio. Dentro de la Academia de Guerra Naval se recibió a un grupo de carabineros a cargo del Mayor Trobok y también un grupo de personal de investigaciones a cargo del Comisario Orlando Gutiérrez Díaz. Dentro del personal oficial de la Armada que realizaba funciones operativas en la Academia de Guerra Naval estaba el Capitán de Fragata Jaime Román Figueroa, el Capitán de Corbeta Julio Faunes Córdova, el teniente Sergio Bidart Jiménez, el teniente Jaime Riesle Wetherby, todos estos se vinculaban con los detenidos, tomarles declaración, realizar detenciones, allanamiento. Todo este personal le daba cuenta directamente al comandante Barra. Tiene entendido que los interrogatorios se llevaban en el Cuartel Silva Palma. No tiene noción que se hayan realizado en la Academia de Guerra Naval. Veía pasar a los interrogadores o personal gente de mar que llevaba las fichas de cada uno de los detenidos, las que eran confeccionadas en la Academia de Guerra Naval. Los detenidos permanecían tanto en la Academia de Guerra Naval como en el Cuartel Silva Palma, principalmente para ser interrogados y lo que resultara de estas indagaciones, eran trasladados a los

centros de detención, que eran los buques mercantes y el Buque Escuela Esmeralda.

19.- Declaración extrajudicial de Sergio Emilio Bidart Jiménez, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 338 de esos autos, cuya copia se encuentra a fojas 494, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que hacia el año 1973 era de dotación de la Escuela de Ingeniería Naval, la que estaba conformada en compañías, específicamente cuatro; que él pertenecía a la “Compañía de Reserva” de la V región, la cual estaba destinada a concurrir cada vez que se requería apoyo de la fuerza; que su compañía estaba a cargo del Comandante Jaime Riesle Wetherby; que los primeros días estuvieron instalados en el Regimiento Maipo y después se trasladaron al Cuartel Silva Palma; que él en su calidad de oficial, estuvo a cargo de una de las secciones de la compañía; que la función de su sección era la de cuidar a los detenidos que permanecían en el Cuartel Silva Palma, realizar patrullajes en la zona y cumplir órdenes de detención de personas, las que provenían de la Academia de Guerra Naval, en una hoja de papel roneo, firmada por alguien que no recuerda y con el nombre de la persona a detener; que estas detenciones en un 90% eran practicadas en la noche y también estaban a cargo de otros tenientes como Ricardo León Burgos, Mario De Giorgis Guarachi y Armando Sartori Zúñiga; que como Jefe de la Academia de Guerra Naval, el declarante tiene la noción de que era el Capitán de Navío Erwin Conn Tesche; que su grupo utilizaba una camioneta color café achocolatado, cuyo código era café 1; que generalmente eran cinco las personas que salían en la camioneta para realizar labores operativas; que respecto de las vestimentas, en un comienzo eran de color azul marino y luego utilizaron unas tenidas de mezclilla color verde; que en el Cuartel Silva Palma en ese tiempo existía una especie de galpón que se habilitó para mantener detenidos, había otro sector habilitado para personal naval que después del 11 de septiembre de 1973 fue utilizado para las mujeres detenidas y existía otro sector del Cuartel donde estaban los dormitorios de la dotación, lugar donde pernoctaban los oficiales solteros como él. Durante ese periodo, en el Cuartel Silva Palma no había sectores habilitados ni personal para interrogar; cuando llegaban los detenidos a la Academia de Guerra Naval, estacionaban el vehículo en el patio interior, informándose de su llegada a la guardia de la misma Academia y bajaba del edificio alguien que era avisado por el guardia y éste lo ingresaba, hasta aquí

llegaba su función; en cuanto a las personas que eran interrogadas en la Academia de Guerra Naval por personal de la Armada, no conoció a nadie, aunque sabe que hubo personal de Infantería de Marina y funcionaban arriba de la Academia de Guerra; en cuanto al personal de Carabineros, el declarante vio en algunas ocasiones a personal de civil y que al preguntarle a alguien le dijo que eran Carabineros, apodados “Cebolla” y “Murciélago”.

20.- Declaraciones extrajudiciales de Nelson Roberto López Cofré, prestadas en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 347 y 415 de esos autos, cuyas copias rolan a fojas 496 y 497, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que en abril de 1973, siendo parte de la Comisión Civil de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, pasó a depender del Departamento Ancla 2 de la Armada de Chile, en investigaciones de la Ley de Control de Armas; que el jefe del Ancla II era el Comandante Franklin González Rodríguez; que desde esa fecha comenzó a trabajar con un grupo de Carabineros conformado por un Suboficial Mayor cuyo nombre no recuerda, conocido como el “cabeza de ajo”, el Cabo 2° Jorge Leiva, conocido como el “cebolla”, y el Cabo 1° Vergara, conocido como el “murciélago”; que sus instrucciones eran detectar a través del control de armas, su contrabando, la parte subversiva y células extremistas del MIR o del MAPU; que inmediatamente después del pronunciamiento militar fue destinado por orden superior a la Academia de Guerra Naval para ponerse bajo las órdenes del aquel entonces Teniente Héctor Trobok Silva, a quien se le destinó una oficina dentro de las instalaciones de la Academia, quien ya en ese entonces mantenía una dotación de ayudantes y otros subalternos, conformando un número de aproximadamente 20 a 25 funcionarios; que las ordenes de aprehensión, en el caso de ellos, eran emanadas del Coronel Trobok; que el mando de la Academia de Guerra Naval y del SICAJSI era uno solo, el Capitán de Navío Sergio Barra Von Kretschmann, quien también decretaba órdenes de aprehensión, que obedecían a gente de células extremistas, del MIR, del MAPU, las que eran ejecutadas por personal de la Armada; que también se cumplían órdenes de aprehensión sin decreto, salían de propia iniciativa en conjunto con el personal de la Armada.

21.- Declaraciones extrajudiciales de Ángel Segundo Lorca Fuenzalida, prestadas en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 349 y 419 de esos autos, cuyas copias se encuentran a fojas 499 y 500, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos

contra los Derechos Humanos de la PDI, que para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba haciendo uso de su feriado legal y dada la situación tuvo que regresar inmediatamente a su unidad, es decir, a la Tercera Comisaría, lugar donde quedó acuartelado y comenzó a encargarse de la logística de la Comisaría; que a la semana siguiente, seguramente después de Fiestas Patrias, lo llamó el Comandante Héctor Trobok, jefe de su Comisaría, quien le comentó que se iba a la Academia de Guerra Naval, a “formar un Estado Mayor conjunto con la Armada”, dándole la orden de partir con él, junto con los carabineros Marcos González y José Villenas, conocido como “el chino”; que los primeros días en la Academia estuvieron sin mucho trabajo y el denunciante cree que paralelamente junto con él llegó el Teniente Héctor Tapia Olivares y el Subteniente Marcelo Vargas Goas, compañero de curso del declarante en la Escuela de Carabineros; que llegaron a trabajar a una organización que se llamaba SICAJSI, cuya finalidad nunca tuvo muy clara; que de los oficiales de la Armada que allí se desempeñaron, recuerda a Erwin Conn, a un tío y un sobrino de apellido Mac Kay, a otro de apellido Soto-Aguilar, a un Teniente Primero de apellidos Lorca Le Roy, a Ricardo Riesco y a otro funcionario de apellido Le-Bert; que también hubo personas del Ejército y de Investigaciones; que su función en la Academia era dar cobertura y apoyo a los equipos navales que concurrían a hacer detenciones y allanamientos en toda la ciudad de Valparaíso, ya que por su labor policial, conocían las calles y las ubicaciones de domicilios mejor que los marinos; que para estas tareas, tenía a cargo un grupo, que se denominó “Zorro 3”; que hubo otros equipos “Zorros”, el número 1 a cargo de Héctor Tapia y el número 2 a cargo de Marcelo Vargas; que las órdenes de detención las realizaban conforme a una orden escrita en un papel que contenía nombres y en su parte inferior, sin pie de firma; que dicho documento le era entregado por funcionarios de la Armada que realizaban labores similares a los Jefes de Servicio, pero que no eran de dotación de la Academia; que entre los otros Carabineros que se desempeñaron en la ACANAV había un oficial de Carabineros de apellido López, que trabajaba conjuntamente con dos suboficiales apodados “el murciélago” y “el cebolla”, este equipo realizaba otro tipo de labores, cree que avocada principalmente al área de interrogatorios y no pertenecían a los grupos de “Zorros” en labores de cobertura.

22.- Declaración extrajudicial de Luis Ricardo Araya Maureira, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 351 de esos autos, cuya copia se encuentra a fojas 501,

quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que el 14 de septiembre de 1973 es informado en su unidad policial, la Sexta Comisaría Almendral, que pasaba a prestar servicios en la Academia de Guerra Naval, debiendo presentarse con el Teniente Coronel Héctor Trobok, donde cumpliría funciones en una organización llamada SICAJSI, la que tenía el control de toda la zona de Valparaíso y sus alrededores, quedando a cargo del equipo de radio con el cual se mantenía contacto con la Prefectura de la ciudad; que trabajaba en una oficina ubicada en el primer piso de la Academia de Guerra Naval, en compañía del Comandante Trobok y cuatro brigadieres de Carabineros, las que tenían aproximadamente entre 23 y 30 años, quienes tenían la función de trabajar con las mujeres detenidas; que con relación a los funcionarios de la Armada que allí se desempeñaban, recuerda a un oficial de nombre Ricardo Riesco, a quien vio en algunas oportunidades en el casino de la Academia; que además recuerda a un oficial alumno de la ACANAV de apellido Aguirre y a un cocinero de apellido Santibáñez, conocido como el “chino”; que su labor estaba circunscrita solo al primer piso de la ACANAV, ignorando por completo las actividades que se desarrollaban en los pisos superiores de dicha unidad; que en este sentido el control de todo el edificio de la ACANAV estaba en manos de la Armada; que nunca custodió detenidos, como así tampoco participó en interrogatorios; que solo supo que los detenidos llegaban al Cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV, pero por tener solo el grado de Subteniente en ese tiempo no tenía acceso a ese recinto; que señala que cumplió la misma función de estar a cargo de las comunicaciones entre el Comandante Trobok y la Prefectura de Valparaíso hasta aproximadamente el mes de diciembre de 1973, siendo destinado a la Décima Comisaría de Fuerzas Especiales; además, afirma no haber sido el ayudante del Comandante Trobok, ya que esa labor le correspondía al Teniente Lorca.

23.- Declaraciones extrajudiciales de Jorge Leiva Cordero, prestadas en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolantes a fojas 353 y 412 de esos autos, cuyas copias se encuentran a fojas 502 y 504, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que el día 11 de septiembre de 1973 se encontraba de turno como estafeta en la Octava Comisaría Barón y alrededor de las 11:30 horas llegó a la unidad el Teniente López, apodado como “chico López”, quien se entrevistó con el Jefe de la Comisaría; que a la salida de López, el declarante recibió

la orden de ir a su casa a cambiarse ropa para quedar a disposición del Teniente López; que en ese momento ya se encontraba junto a López el Cabo Primero Eduardo Vergara Brauer, conocido como “el murciélago”; que luego de ir a su casa, se dirigieron inmediatamente a la Academia de Guerra Naval, donde se presentaron con el Comandante Trobok y su ayudante, el Teniente Luis Araya; que allí pudo ver a un Capitán de Carabineros de apellido Tapia, quien disponía de un vehículo especial prestado por la Armada y de quien presume, trabajaba directamente en los interrogatorios en el cuarto piso de la Academia; que en la primera presentación con estos oficiales, se les informó que trabajarían en la ACANAV para detener a las personas que les indicaran; que en ese entonces, en la Academia de Guerra Naval funcionaba el Departamento de Operaciones compuesto por personal de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones y conoció también a un funcionario de Ejército; que, como jefe del Departamento de Inteligencia Ancla II se desempeñaba el Comandante de la Armada de apellido González; que de igual forma, del departamento de operaciones recuerda al Comandante de la Armada de apellido Mac Kay; que los detenidos primero eran llevados a la ACANAV y luego a la entrada del molo de Valparaíso, donde los recibían y posteriormente distribuían entre los buques; que él salía a trabajar en un Fiat 125 en compañía de Eduardo Vergara y el Teniente López; que las órdenes de detención las recibían del Teniente López, quien a su vez podría haberlas recibido del Comandante Trobok o el Comandante de la Armada Mac Kay, a quien apodaban afectivamente “tío galleta”; que durante esos días debió seguir en labores operativas de allanamientos y detenciones, teniendo como unidad base a la ACANAV, al igual que Eduardo Vergara; que en la Academia, los interrogatorios se desarrollaban en el cuarto piso, al cual nunca tuvo acceso; que también había interrogatorios en el Cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV, específicamente en unas construcciones de material ligero, tipo mediagua, ubicadas a un costado de una canchita que había en el cuartel, donde había muchos marinos detenidos en ese entonces; que entre los interrogadores de la ACANAV recuerda al Teniente de Carabineros Lorca, conocido como “el loco”, con quien participó en interrogatorios en La Esmeralda; que de los interrogadores en La Esmeralda, recuerda a Juan Mac Kay, a su pariente del mismo apellido, con quien también tuvo que interrogar a algunas personas.

24.- Declaración extrajudicial de Juan Humberto Campos Cifuentes, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para

mejor resolver, rolante a fojas 356 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 505, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que para el 11 de septiembre de 1973, por órdenes de Rodolfo Stange Oelckers, tercero de la Prefectura de Valparaíso, debió concurrir con un grupo de carabineros a tomar el control de la cárcel de Valparaíso; que en el mes de octubre de ese año lo enviaron al curso de anti-subversión y guerrilla urbana en el destacamento “Miller” de la Infantería de Marina, el que duró alrededor de tres meses; que en diciembre de 1973 fue trasladado a la Décima Comisaría de Fuerzas Especiales, cuyo jefe era el Mayor Raúl Arellano Castillo; que trabajó allí hasta el verano de 1974, en que fue destinado de enlace a la Academia de Guerra Naval, unidad donde trabajaban instituciones combinadas de las distintas Fuerzas Armadas y de orden, trabajó en el Departamento de Análisis bajo las órdenes de los Capitanes de Corbeta Rigoberto Cruz Johnson y Erwin Conn Tesche; que en el lugar su función era clasificar por orden alfabético las hojas de antecedentes de los detenidos y de gente a detener, labor que había iniciado también el teniente de Carabineros Manuel Díaz Vieira; que el funcionamiento de dicha unidad era compartimentado, pero supo que muchos funcionarios navales como de otras instituciones, se desempeñaban ahí desde los primeros días de instauración de la Dictadura Militar, entre quienes incluye a los ya señalados Cruz y Conn; que recuerda además en esta misma condición, a un oficial de mar de apellido Fernández, el Infante de Marina Ricardo Riesco, a quien en una ocasión al entrar repentinamente a una salita del Cuartel Silva Palma, sorprendió torturando a una persona en una cama de huinchas, conocida como “parrilla”, en las cuales se aplicaba electricidad; al Sargento Hevia, quien en algunas oportunidades le acompañó como conductor a realizar ciertas diligencias en la ciudad, entre las cuales recuerda haber ido a la Universidad Federico Santa María con la misión de contactarse con el Rector, quien les entregaba listados de personas con filiaciones políticas para ser expulsados de dicho plantel de estudios.

25.- Declaración extrajudicial de Erwin Hugo Andrés Conn Tesche, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 397 de esos autos, cuya copia fue agregada a fojas 506, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que para el año 1973 se encontraba como alumno de la Academia de Guerra Naval y fue enviado a reforzar el Estado Mayor del Almirante Merino, quien era su jefe directo y quien cumplía las funciones de

Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, de Juez Naval y de Comandante del Área Jurisdiccional de Seguridad de la Provincia de Valparaíso, teniendo como centro de operaciones la Academia de Guerra Naval; que las misiones específicas que se le encomendaron ese día fueron las de mantener las informaciones generales de lo que se estaba desarrollando, respecto a los allanamientos a los cordones industriales y las detenciones que se producían, no teniendo los nombres de las personas que eran detenidas; que esa labor la realizó todo el día 11 de septiembre de 1973, pasando al día siguiente a hacer labores de análisis de información con los alumnos de primer año de la ACANAV; que la persona que tenía a cargo las operaciones en terreno era el Capitán de Fragata Fernando Camus Scherrer, junto con el jefe del Estado Mayor, Comandante Aldoney, siendo este último quien le informaba al Almirante Merino sobre los hechos que se desarrollaban; que el oficial a cargo del equipo de interrogación del Cuartel Silva Palma era el Capitán Soto-Aguilar; que en la ACANAV estuvo un Capitán de Reserva del Regimiento Coraceros cumpliendo funciones como analista, también estuvo el Mayor de Carabineros Héctor Trobok, cuyo equipo estaba formado por cuatro oficiales, quienes le informaban sus actuaciones directamente al Comandante Sergio Barra, Jefe del SICAJSI.

26.- Declaración extrajudicial de Enrique Orlando Corrales Díaz, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 400 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 507 vuelta, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que para el 12 o 13 de septiembre de 1973 fue destinado a la Comandancia de la Guarnición de la Provincia de Valparaíso, que se encontraba bajo el mando del antes director de la Escuela Naval, Capitán de Navío Carlos Borrowman; que en esa función se encargaba de realizar labores de enlace entre la Comandancia de Guarnición de la Provincia y Carabineros, ya que la provincia se encontraba dividida en áreas jurisdiccionales, desempeñándose en dicha labor hasta enero de 1974, cuando es agregado al SICAJSI, con sede en la Academia de Guerra Naval, pasando a trabajar en la sección de análisis; que no tenía contacto con el personal profesional que se encargaba de efectuar los interrogatorios, pero supo que esta labor era cumplida principalmente por personal de la Infantería de Marina, quienes controlaban el sector del Cuartel Silva Palma y el área restringida de la Academia de Guerra Naval en donde permanecían los prisioneros; que en la

ACANAV permaneció hasta el mes de marzo de 1975, fecha en la cual fue enviado a realizar un curso en la Escuela de Ingeniería del Ejército en la localidad de Nos.

27.- Declaración extrajudicial de Eduardo Rigoberto Cruz Johnson, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 403 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 509, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que a la fecha del pronunciamiento militar, con el grado de Capitán de Fragata, se desempeñaba como Oficial alumno del primer año del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval; que a partir del 11 de septiembre de 1973 hasta fines de ese mes, le correspondió cumplir funciones como Jefe de Operaciones de las Fuerzas de Valparaíso, con asiento en la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, dependiente del Comandante de las Fuerzas de Valparaíso, en ese entonces el Capitán de Navío Carlos Borrowman Valenzuela, director de la Escuela Naval, quien tenía bajo su mando las fuerzas provistas por las escuelas de la Armada, para fines de control y seguridad urbana, las que estaban organizadas de acuerdo a un plan llamado "Cochayuyo", en una forma similar al despliegue que se emplea para el control de las elecciones a cargo de las diferentes comunas del gran Valparaíso; que una vez concluidas estas labores, a fines de septiembre de 1973, fue destinado al SICAJSI, en donde fue designado Subjefe, asumiendo las labores administrativas bajo las órdenes del capitán de Navío Sergio Barra; que este organismo funcionaba en dependencias de la Academia de Guerra Naval; que a mediados de noviembre de ese año entregó el cargo al entonces Capitán de Corbeta Erwin Conn Tesche; que su labor como Subjefe, a cargo de las labores administrativas, consistía en disponer de todos los servicios de guardia y turnos, en general, el uso de los servicios básicos, entiéndase agua, luz, teléfono, aseo y mantenimiento en general de las dependencias; que de esta forma el jefe operativo y encargado de las labores de inteligencia que realizaba el SICAJSI era exclusivamente el Capitán de Navío Sergio Barra; que uno de los grupos de interrogadores se encontraba bajo el mando del Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar Cornejo, quien trabajaba con personal de la Escuela de Infantería de Marina, de la cual era Subdirector, por lo que los designaba y rotaba personalmente.

28.- Declaración extrajudicial de Juan Guillermo Mac Kay Barriga, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 423 de esos autos, cuya copia se encuentra a fojas 510,

quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que fue trasbordado a la Academia de Guerra Naval a fines de septiembre de 1973, luego de estar unos días cumpliendo funciones como ayudante del Jefe de Gabinete de la Primera Zona Naval, quien en ese tiempo era el Comandante Baquedano; que la ACANAV se encontraba al mando del Comandante Sergio Barra, que utilizó las instalaciones del Cuartel Silva Palma para complementar las actividades de inteligencia que comenzó a desarrollar, ya que este recinto contaba con dependencias para detenidos. De esta forma la ACANAV suspendió sus clases y los alumnos comenzaron a cumplir funciones en el SICAJSI; que personalmente, llegó al departamento de análisis, siendo recibido por el Comandante Aguirre, quien le explicó las funciones que desempeñaría; que en estas labores estuvo entre siete y diez días, tras lo cual lo designaron como enlace con las Brigadas Civiles, cargo que le permitiría una mayor libertad de desplazamiento en consideración a que debía reunirse en forma periódica con los integrantes de estas agrupaciones; por lo antes señalado, no tuvo ningún contacto con el personal operativo ni con los funcionarios encargados de los interrogatorios; que sobre ese último punto, puede señalar que las funciones de interrogar detenidos se encontraba a cargo de personal de Carabineros, Investigaciones e Infantes de Marina que hicieron el curso de tratamiento de prisioneros de guerra en Estados Unidos.

29.- Declaración extrajudicial de Juan Manuel Jofré Montenegro, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 508 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 511 vuelta, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que a principios del mes de octubre de 1973 fue trasbordado a la Academia de Guerra Naval como fotógrafo en práctica junto a otros cinco compañeros y el profesor de la especialidad; que en ese tiempo, el Director de la ACANAV era el Comandante Sergio Barra; que en dicha repartición se formó un comando conjunto de inteligencia de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden; que su función era fotografiar a los detenidos que llegaban a la ACANAV, solo de frente con una regla atrás, de modo de conocer su estatura y con su identificación abajo, como de foto de carnet; que los que más salían a buscar detenidos eran Carabineros, por su conocimiento de este tipo de labor; que dicho grupo se denominaba SICAJSI y trabajaban de civil, sin cortarse el pelo; que trabajaban en todos los pisos de la ACANAV; que con el tiempo el SICAJSI solo

ocupó el cuarto piso, donde había salas grandes y se mantenía a los detenidos; que su jefe directo era el Comandante Rigoberto Cruz Johnson, quien en su calidad de tal debía calificarlo; que posteriormente, todos los detenidos fueron trasladados desde el cuarto piso al Cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV, ocupando todas sus dependencias, ya que los marinos que había allí detenidos fueron llevados hasta la barcaza Morel; que los interrogatorios se llevaban a cabo en un primer momento en el cuarto piso de la ACANAV y posteriormente en el Cuartel Silva Palma; que había un grupo encargado de esas labores, practicadas por Infantes de Marina, de entre quienes recuerda a uno llamado Manuel Leiva, conocido por ser uno de los primeros Infantes de Marina en haber ido a cursar a Panamá, al “Cicerón”, al “Telémaco” y al “Sócrates”, todos de alrededor de 40 años; que también trabajaba en esas labores el Infante de Marina Hernán Esparza; que de entre el personal del SICAJSI, recuerda al Teniente Infante de Marina Riesco, quien al parecer también salía con carabineros a realizar labores operativas.

30.- Declaración extrajudicial de Manuel Atilio Leiva Valdivieso, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 518 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 515, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que al 11 de septiembre de 1973 ya ostentaba el grado de Suboficial Mayor, desempeñándose en la Escuela de Infantería de Marina de Viña del Mar; que a raíz de lo acontecido, fue enviado a la Academia de Guerra Naval con una escuadra de unos 10 Infantes de Marina, ya que la Academia estaba dotada casi totalmente de marinos; que su labor era distribuir al personal para las guardias y turnos de la unidad; que recuerda que en esa época se hacían interrogatorios; que nunca participó en labores operativas; que estaban ubicados en el segundo piso de la Academia; que en ese periodo se les ordenó utilizar nombres supuestos, chapas; que la suya era “Cicerón”; que no logra recordar las chapas de otros funcionarios; que los detenidos, que eran hombres y mujeres, no estaban en celdas, sino que estaba en salas, encerrados en grupos; que no recuerda haber interrogado a detenidos; que de entre el personal que trabajó ahí y que se le nombra, logra recordar a un Comandante de apellido Soto-Aguilar, cuyo cargo no retiene; que además recuerda a Jaime Lazo quien, según recuerda, perteneció a la escuadra de Infantes de Marina que llegó con él a la ACANAV, a un Infante de Marina de apellido Lagos, recuerda también haber trabajado con el Oficial Infante de Marina

Ricardo Riesco, aunque no puede señalar si trabajó en el Cuartel Silva Palma o en la ACANAV.

31.- Declaración extrajudicial de Rolando Matamala Toloza, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 522 de esos autos, cuya copia se halla a fojas 516, quien señaló ante la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que para el año 1969 fue destinado a la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, siendo nombrado para el Departamento Ancla II, siendo su labor la de controlar los movimientos de buques de las flotas argentinas y peruanas; que alrededor de tres días antes del 11 de septiembre de 1973 todo su departamento Ancla II fue trasladado a la Academia de Guerra Naval, a cargo del Teniente 2° Julio Faunes; que ocuparon el cuarto piso de la ACANAV; que luego del 11 de septiembre de 1973 continuaron haciendo labores de inteligencia y archivo; que en la mañana de ese día llegaron los Infantes de Marina, alrededor de 30, los cuales comenzaron a trabajar en el Cuartel Silva Palma, aledaño a la ACANAV; que llegó también un grupo de civiles, conocidos como el doctor, el abogado, el psicólogo; que empezó a cumplir la función de trasladar detenidos desde el buque Lebu y el Cuartel Silva Palma, siendo el jefe militar del bus Pegaso encargado de los traslados, el Suboficial más antiguo; que los detenidos eran trasladados al Cuartel Silva Palma para los interrogatorios; que los primeros detenidos que comenzaron a llegar al cuartel Silva Palma tiene que haber sido el 14 o 15 de septiembre de 1973; que de entre las personas que recuerda en la ACANAV puede señalar a Rodolfo Stange, quien llegó a ser Director General de Carabineros, ya que estaba mencionado en un listado que había en la ACANAV para efectos de alimentación junto con otros oficiales; que recuerda además a Erwin Conn, a Franklin “El Cuervo” González, Virgilio Nikolai, Juan Mac Kay; que también recuerda al “cebolla” por cuanto siempre tenía críticas por ser muy severo con los prisioneros; que recuerda además a la esposa de Guilfor Aracena, quien empezó como enfermera en la ACANAV y el cuartel Silva Palma y que luego cursó inteligencia, entrando a desempeñarse en esa área; que otro de los enfermeros era el Cabo Hidalgo, de dotación de la ACANAV, quien veía a los detenidos que salían mal de algunos interrogatorios; que recuerda además al Oficial de Mar recontratado de apellido Santa Cruz, que se desempeñó en el Lebu; que el jefe de la ACANAV era el Comandante Sergio Barra.

32.- Declaración judicial de Germán Eduardo Santana Boza, de fojas 125, quien ratifica su declaración extrajudicial; señala que a Miguel Flores Eloz lo conocía desde el Liceo, ya que cursaban enseñanza media en el Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, esto fue en el año 1971, ya que luego se fue a estudiar a Santiago; que en el año 1973 volvió a estudiar al Liceo Industrial; que los documentos que le entregó este tal "Dennis", que no recuerda si fueron dos contactos como señala la denuncia de la Fiscalía Naval, efectivamente se los entregó a Miguel Flores, pero esto sucedió por un encuentro fortuito que tuvieron en la calle, en el cual le hace entrega de esa documentación para que la estudiara y pudiesen armar un frente de resistencia; que el encuentro fue fortuito, pero andaba buscándolo para entregarle esa información porque lo conocía y sabía que él era la persona más idónea; que a Angel Saldomando lo había contactado para entregarle esta información, pero antes que se concretara la reunión, le tomaron detenido; que la noche del 9 de septiembre de 1974, cuando le toman detenido en su domicilio, le suben a un auto, en la parte de atrás, iban dos personas más, entre ellos, Miguel Flores, a quien reconoció por su contextura física, parte de su cara, porque llevaba una venda, su cabello y además su voz, porque algo le preguntaron y él respondió; que supo que llegaron al Cuartel Silva Palma, porque uno de los efectivos de la Armada que los llevaba señaló que habían llegado a dicho lugar; que los ingresaron a una sala oscura, con un escritorio, con mucha gente en el suelo; que debían pasar por encima de las piernas de las personas para llegar a un lugar que estuviese vacío y en ese momento intercambió palabras con Miguel Flores, pero no recuerda el tenor de esa conversación; que mientras estuvo incomunicado le interrogaron aproximadamente cuatro veces; que no recuerda que le hayan careado con otra persona; que los interrogatorios eran siempre con capucha y le mostraban una pizarra que tenía el organigrama del MIR, y le exigían que entregara nombres de las personas que faltaban y le preguntaban por otras personas; que los interrogadores estaban detrás de él, porque solo los escuchaba hablar; que recuerda el rostro de uno de ellos, que era quien estaba en el escritorio y es quien le hace firmar la declaración; que durante los interrogatorios pudo hacerse una idea de cómo era la sala de interrogatorios y de las cosas que había, un escritorio, un catre metálico, una pizarra, un magneto, y la silla de interrogatorio. Acompaña un croquis de la sala de interrogatorios en la que estuvo; que generalmente eran tres los que participaban en el interrogatorio, uno de ellos, interrogando, otro dirigiendo al interrogador y el tercero era quien manipulaba el

magneto; que sentía que abrían y cerraban la puerta, entraba y salía gente; que luego de siete días que estuvo incomunicado, le trasladaron a la “cocina”, lugar en el que estuvo entre un mes y mes y medio, estando ahí, le sacaron a interrogatorio al menos dos veces más; que durante su detención en el Cuartel Silva Palma no coincidió con Miguel Flores, sino que volvieron a encontrarse en la cárcel de Valparaíso; que después que salieron de la cárcel, esperando un país para cumplir la pena de extrañamiento, Miguel Flores vivió un tiempo en su casa; que exhibido el álbum fotográfico correspondiente a los funcionarios de la Armada que se desempeñaron en el CAJSI PRIZONA, durante el año 1974, puede señalar que no reconoce a nadie dentro de las fotografías mostradas. A fojas 405 Germán Eduardo Santana Boza, en el plenario, ratifica íntegramente su declaración judicial. En fojas 108 rola informe policial N° 973 que contiene su declaración extrajudicial, donde señala que en el año 1974 tenía 22 años y se encontraba estudiando en la Escuela Industrial ubicada en Avenida España, era militante del MIR, específicamente participaba en el FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios) del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, ubicado en calle Álvarez frente a la estación de Viña del Mar, ahí conoció a Miguel Flores Eloz, Benjamín Barrios Samith y Rigoberto Brito López; que el 9 de septiembre de 1974, alrededor de las 22:00 horas, mientras se encontraba en su domicilio junto a su familia, llegó personal de la Armada, quienes sin indicar motivo, procedieron a su detención, le sacaron de su domicilio, le ingresaron a un automóvil, recuerda que el chofer vestía de uniforme de la Armada y las otras cuatro personas vestían de civil, le vendaron la vista y comenzó el trayecto del móvil; que al descender del vehículo escuchó que uno de ellos le señaló que estaban en el Cuartel Silva Palma, le condujeron a una sala de espera donde le consultaron por sus datos personales; que en esta sala habló brevemente con Miguel Flores Eloz, luego de un par de horas lo llevaron a otra dependencia muy pequeña, para incomunicados, donde permaneció siete días aproximadamente, durante ese periodo fue expuesto a varios interrogatorios, lo cuales de preferencia eran realizados durante la noche y con la vista vendada donde le consultaban por su militancia y principalmente por personas del MIR; que estos interrogatorios era acompañados de amenazas de muerte hacia su persona y hacia su familia, golpes de pie, puños y con objetos contundentes, aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo incluyendo los genitales; que finalizando los interrogatorios le regresaban a la sala de incomunicados, donde estaba privado de alimento y agua; que debido a que estaba con la vista

vendada no pudo observar a sus interrogadores, además no escuchó ningún apodo; que también fue sometido a un simulacro de fusilamiento; que transcurridos siete días le trasladan hasta otras dependencias del mismo cuartel, recuerda que eran dos salas grandes en cuyo interior habían unos camarotes; que en este lugar habían unos ocho detenidos, entre ellos, recuerda a Carlos Carstens; que era una habitación de tránsito, ya que desde ahí las personas eran trasladadas a otros lugares de detención o la cárcel de Valparaíso, principalmente; que en estas dependencias permaneció tres semanas aproximadamente, en ese periodo fue expuesto a interrogatorio; que durante octubre fue trasladado a la cárcel de Valparaíso, donde se encontró con Miguel Flores Eloz; que no recuerda que le haya contado detalles de lo que le tocó vivir; que en la cárcel estuvo recluido aproximadamente un año, quedando en libertad condicional con firma semanal, la que debía cumplir en la Fiscalía Naval; que fue sometido a un Consejo de Guerra siendo condenado a la pena de ocho años de extrañamiento por el delito de asociación ilícita; que en este Consejo también salieron condenados Miguel Flores Eloz y Angel Saldomando Díaz, a este último lo conocía porque tenían amigos en común.

33.- Declaración judicial de Angel Saldomando Díaz, quien a fojas 148, ratifica su declaración extrajudicial; señala que recuerda que a su casa ingresaron dos personas vestidas de civil armadas con metralleta y habían otras tres afuera; que le encapuchan al entrar al Cuartel Silva Palma; calcula que estuvo alrededor de un mes en el Cuartel Silva Palma, porque pasaron las fiestas patrias allí; que tiene que haber sido fines de septiembre o principios de octubre de 1974 cuando lo trasladan a la cárcel pública; que en los interrogatorios le preguntaban si pertenecía al MIR, con quien estaba en contacto, si conocía a ciertas personas, si tenían armas y otras cosas que ya no recuerda; que los interrogatorios fueron siempre vendidos, salvo una vez que le ordenaron levantar la venda para firmar una declaración que no pudo leer, mientras sus interrogadores estaban a sus espaldas; que a Miguel Flores lo vio en el Cuartel Silva Palma cuando después de un interrogatorio le llevaron a la sala común; que ahí se reconocieron y se dio cuenta que él, al parecer, había sido detenido antes que él; que respecto a lo que consta en la causa Rol A-494 de la Fiscalía Naval de Valparaíso, no declaró nada de lo que figura ahí; no declaró ante el Fiscal Naval, solo recuerda haber declarado a un detective, pero la declaración policial se le hizo en esa época y que se le relata en este acto; que tampoco corresponde a algo que haya dicho; que la Armada construyó para

acusarle algo que era muy poco creíble, es una especie de construcción a partir de distintas cosas que han declarado otras personas, y que luego le atribuían a ellos como si hubiese sido declarada por cada uno. A fojas 406, Angel Saldomando Díaz, en el plenario, ratifica su declaración judicial. En declaración extrajudicial de Saldomando Díaz contenida en informe policial N° 2992, que rola a fojas 133, expresa que para septiembre de 1974 tenía 18 años, vivía en compañía de sus padres en calle Miraflores Alto, Viña del Mar, estudiaba en el colegio San Pedro Nolasco, y además trabajaba en el taller mecánico de su padre en Viña del Mar, era integrante y delegado del Frente Estudiantil Revolucionario; que el día 12 de septiembre de 1974, a eso de las 02:00 de la madrugada fue detenido en su domicilio, por funcionarios al parecer de la Marina que vestían de civil, fue subido a una camioneta y trasladado al Cuartel Silva Palma, donde fue interrogado por temas relacionados a su participación en política, estuvo en los nichos ubicados en el subterráneo del cuartel sufriendo las torturas físicas y psicológicas; que permanecía con la vista vendada y custodiado por personal de Infante de Marina; que en el cuartel había unas 40 personas las cuales rotaban, recuerda entre ellas a Francisco Cádiz, Miguel Flores, Germán Santana; que permaneció alrededor de un mes aproximadamente, para ser derivado directamente a la cárcel pública, donde estuvo hasta el mes de mayo de 1975; que Miguel Flores era su amigo, vivía en calle Condell, participaban en actividades del FER; que respecto a su detención supo que llegó al Cuartel Silva Palma antes de su detención, lo vio al momento de salir de los interrogatorios diciéndole que había sufrido apremios al momento de ser interrogado; que posteriormente al igual que su persona pasó a la cárcel pública.

34.- Copia de declaración judicial prestada en la causa Rol 83-2016, por Rodrigo Patricio Alcázar Zuanich, ordenada agregar como medida para mejor resolver a fojas 529, quien señala que lo detuvieron en marzo de 1974 por Carabineros, que lo llevó al Cuartel Silva Palma junto a su cuñado, lo llevaron a una sala de interrogatorio, le aplicaron corriente y le hicieron tortura psicológica, al hacerle escuchar como torturaban a su hermana u otras personas; que tiene conocimiento que en el cuartel Silva Palma cumplía funciones Ricardo Riesco, lo que sabe porque fue él quien allanó su casa, además su madre lo conoce, porque cuando allana su casa él se presenta y ella lo conocía y también a su familia; que recuerda a alguien que llamaba “Telémaco” y recuerda también haber visto en una oportunidad a dos mujeres, una pelirroja y otra pelinegra; que también participaba

activamente de los interrogatorios a alguien que hacían llamar el “profesor”; que tras dos semanas de detención en el Cuartel Silva Palma le pasan a un lugar llamado “la cocina”, era un lugar de libre plática, donde pasaban las personas que ya habían sido interrogadas y que luego serían derivadas a la cárcel pública o dejados en libertad; que estuvo ahí hasta abril de 1974; que después lo trasladaron a Puchuncaví, recordando entre las personas detenidas a Iván Vuskovic. También se agregó copia de declaración extrajudicial contenida en informe policial prestada por Alcázar Zuanich en la causa penal Rol 948-2006, traída a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 74 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 606, quien señala que, estando secuestrado en el Cuartel Silva, fue interrogado y torturado por un grupo de interrogadores.

35.- Declaración judicial prestada por Abelardo Zamorano Barrera en la causa penal Rol 948-2006 traída a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 19 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 519, en la que señala que fue detenido en dos ocasiones, la primera en octubre de 1973 y la segunda en marzo de 1974; que en cuanto a esta última, afirma que fue detenido por personal de Servicio de Inteligencia Naval y luego llevado al Cuartel Silva Palma de Valparaíso, lugar en el cual fue sometido a interrogatorios con golpes, aplicación de corriente, incomunicación y a pan y agua, estando durante un mes para luego ser trasladado al campo de detención Isla Riesco.

36.- Declaración extrajudicial contenida en informe policial prestada por Alfredo Saieg en la causa penal Rol 948-2006 traída a la vista como medida para mejor resolver, cuya copia se agregó a fojas 523, quien señala que, estando secuestrado en el Cuartel Silva Palma, le llevaron a una sala de interrogatorios, y un grupo de interrogadores lo sometió a torturas e interrogatorios.

37.- Declaración extrajudicial contenida en informe policial prestada por Carlos Rivero Espínola en la causa penal Rol 948-2006 traída a la vista como medida para mejor resolver, cuya copia se agregó a fojas 515 vuelta, quien señala que, estando secuestrado en el Cuartel Silva, fue torturado por un grupo de interrogadores, escuchando por parte de otros detenidos que entre las personas que interrogaban se encontraban dos personas apodadas “el remolino” y “el profesor”.

38.- Informe policial N° 4186, que rola a fojas 96, en el cual se consigna que se procedió a efectuar un análisis de los antecedentes contenidos en la Brigada, recabándose que en el Cuartel Silva Palma, de la Armada de Chile, operaba un

organismo de seguridad denominado “Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, de la Primera Zona Naval de Valparaíso”, SICAJSI. En dicho centro de detención operaban diversos funcionarios de la Armada, nombrando como personal de Infantería de Marina interrogadores en la Academia de Guerra Naval a Ricardo Riesco Cornejo como jefe de los interrogadores, a Juan Reyes Basaur y Valentín Riquelme Villalobos, entre otros. Además, indica el informe que el sujeto apodado “Romeo” corresponde a Francisco Prado Espejo, actualmente fallecido. En el mismo sentido, rola informe policial N° 3850, a fojas 142, el cual señala que se logró recopilar que entre los meses de septiembre de diciembre de 1973, los ex agentes del estado, pertenecientes al Ejército, Armada, Carabineros e Investigaciones de Chile, se encontraban adscritos al organismo de seguridad denominado Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de la Primera Zona Naval de Valparaíso, el cual dependía jerárquicamente del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso o llamado en tiempos de guerra como “Comandante de Área Jurisdiccional de seguridad Interior” (CAJSI). Dicho organismo mantenía su centro de operaciones en la Academia de Guerra Naval de Valparaíso, además utilizaba para la reclusión de personas al recinto contiguo denominado Cuartel Silva Palma que originalmente correspondía a las celdas de detención que la Armada utilizaba normalmente para la reclusión de sus efectivos por razones disciplinarias o judiciales, pero que a contar de 11 de septiembre de 1973 comenzaron a ser utilizadas para la reclusión de personas civiles; que el SICAJSI-PRIZONA tenía la misión de neutralizar cualquier foco de insurgencia y detectar todo elemento de la izquierda política para lo cual tenían facultades para la detención de personas, allanamientos, vigilancias, etc., labores que ocasionalmente la efectuaban en conjunto con las Fiscalías Navales que se conformaron en tiempo de guerra y que además operaban también en la Academia de Guerra Naval. En cuanto a los aprehensores estos funcionaban en equipos. Se indica que los equipos de detención de Carabineros se denominaban “Zorro 1”, “Zorro 2”, “Zorro 3”.

39.- Informe policial N° 20210099506/01072/207, de fojas 237, que determinó en base a análisis de declaraciones prestadas anteriormente, por ex agentes del Cuartel Silva Palma ante personal especializado de la Brigada, que los agentes apodados como “Telémaco”, y “Jerónimo”, corresponderían a Juan Reyes Basaur y Valentín Riquelme Villalobos. No fue posible hallar relatos donde se haga

mención del agente apodado “Taco de Goma” a excepción de la declaración una víctima de detención ilegal y torturas, Eduardo Cabrera Vásquez, quien menciona como interrogadores a los agentes apodados “Taco de Goma”, “Telémaco” y “Jerónimo”, lo que permite inferir que necesariamente Juan Reyes Basaur y Valentín Riquelme Villalobos conocieron al agente apodado “Taco de Goma” o “Taquito de Goma”, según el relato de la víctima.

40.- Causa Rol A-494 instruida por delito de infracción a la Ley 12.927 sobre seguridad del Estado, seguida en contra de Miguel Eduardo Flores Eloz, guardada en custodia bajo el N° 49-2016, según constancia de fojas 104. Dicho proceso se siguió ante la Fiscalía Naval. Aparece que la causa se inicia por denuncia del jefe del SICAJSI, a Miguel Flores Eloz, se indica que fue detenido el 5 de septiembre de 1974, por su participación en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el parte está firmado por Sergio Fuenzalida Vigar y Julio Lavín Valdés. También se encuentra la denuncia contra Angel Saldomando Díaz, detenido el 10 de septiembre de 1974. Dice que el inculcado ingresó a la cárcel pública con esta fecha y quedó a disposición de la fiscalía, esto es, el 23 de septiembre de 1974. También aparece detenido German Santana Boza, el 8 de septiembre de 1974. En todos los partes se consigna una declaración que habrían prestado los detenidos, supuestamente en los cuarteles del SICAJSI. El primer detenido que aparece declarando en la Fiscalía Naval es Angel Saldomando el día 25 de septiembre de 1974. Solo el 25 de octubre de 1974 aparece declarando Miguel Flores Eloz. El 5 de noviembre Germán Santana. Consta que el 19 de mayo de 1975 se otorgó libertad bajo fianza a Miguel Flores Eloz. Asimismo, consta y además se agregó copia de sentencia a fojas 219 que en dicha causa, con fecha 18 de julio de 1975, se condena a Miguel Eduardo Flores Eloz a la pena de tres años de extrañamiento menor en su grado medio, como autor de infracción a los artículos 1, 2 y 4 del D.L. N° 77 sobre asociación ilícita; asimismo, se le condena a la pena de tres años y un día de extrañamiento menor, por infracción al artículo 4 letra c) de la Ley N° 12.927 de Seguridad Interior.

41.- Documento agregado a fojas 536 como medida para mejor resolver en el que se consigna que Miguel Eduardo Flores Eloz se encuentra incluido en el Informe Valech II bajo el Registro N° 3082, del “Listado de prisioneros políticos y torturados”.

HECHOS ACREDITADOS. -

SEGUNDO: Que, los medios de prueba enumerados y desarrollados en el considerando precedente, debidamente analizados y ponderados conforme a la normativa probatoria del Código de Procedimiento Penal y relacionados entre sí conforme a las reglas de la lógica, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 488 del referido código, y permiten tener por fundado y legalmente acreditado en este proceso los siguientes hechos:

Que, existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, conformada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas las conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, Miguel Eduardo Flores Eloz, fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI) debido a su militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), lo que se concretó el día 3 de septiembre de 1974, en el Liceo nocturno de Playa Ancha, siendo conducido por personal de Carabineros de Chile al Cuartel Silva Palma, y estando en ese lugar un grupo de interrogadores, organizados y coordinados por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de sus compañeros de Partido, encontrándose vendado, lo mantuvieron encerrado sin orden judicial legítima que lo justificare, lo interrogaron y torturaron mediante golpes y aplicación de corriente en su cuerpo. Fue recién puesto a disposición de la Fiscalía Naval con fecha 25 de octubre de 1974, desde donde se ordenó su ingreso a la Cárcel de Valparaíso.

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS. -

TERCERO: Que, uno de los delitos por el cual se dictó acusación fiscal es el de secuestro con grave daño, previsto y sancionado en el artículo 141 incisos

primero y tercero del Código Penal vigente a la fecha de los hechos. Cabe tener presente que el texto del artículo 141 del Código Penal señalaba lo siguiente:

"Artículo 141.- El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de secuestro, será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito.

Si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados".

En concepto de este juez, los hechos descritos cabe calificarlos como delito de secuestro con grave daño, con arreglo a lo previsto en el artículo 141 inciso tercero antes transcrito. En efecto, la víctima fue detenida en un establecimiento educacional sin derecho y contra su voluntad, y mantenida en esa privación de libertad por agentes navales en el Cuartel Silva Palma, donde no podía escapar en modo alguno, teniendo como base únicamente su militancia política. El detenido fue conducido al Cuartel Silva Palma, lugar donde es interrogado bajo apremios ilegítimos y torturado de manera reiterada por los miembros de un grupo especial de funcionarios de la Armada de Chile, pertenecientes al cuerpo de Infantería de Marina. La ilicitud del encierro se presume claramente de los antecedentes, en cuanto los miembros del grupo especial de interrogadores y otros miembros del SICAJSI, en sus testimonios expuestos en el fundamento precedente, dan cuenta del procedimiento de aprehensión e interrogación, de los que aparece que en modo alguno se les daba a conocer a los detenidos la afectación de una orden de detención que justificare la privación de libertad, a quienes por lo demás se encontraban vendados y en el caso particular se les obligaba a confesar supuestos ilícitos. Asimismo, aparece que la Fiscalía Naval recién vino a tomar declaración indagatoria a Flores Eloz el 25 de octubre de 1974, esto es, casi a los dos meses después de haber sido detenido, ya largamente excedido el tiempo legal de detención.

El grave daño se manifiesta y evidencia de los elementos probatorios contenidos en el considerando primero, particularmente de lo declarado por la víctima, quien relata pormenorizadamente los apremios sufridos y las secuelas psicológicas causadas como consecuencia de aquellos, asimismo, en virtud de los testimonios contestes de otros detenidos que también se encontraron encerrados y

sometidos a interrogatorios en el Cuartel Silva Palma, de todo lo cual aparece que los interrogatorios eran acompañados con golpes, utilización de corriente y amenazas de parte de los funcionarios pertenecientes al grupo especial de interrogadores. En este sentido, los sujetos activos del delito se encontraban especialmente encargados de mantener encerrados e interrogar a las personas detenidas, mediante las amenazas y apremios físicos. El grave daño así se demuestra en razón de los antecedentes probatorios que se han referido, de los cuales cabe presumir las secuelas psicológicas que los hechos denunciados le produjeron a la víctima. Sobre este punto cabe señalar que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, creada por Decreto Supremo N° 1.040, publicado en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 2003, con el objetivo de determinar las personas que sufrieron privaciones de libertad y torturas por razones políticas, entregó su informe al Presidente de la República el 10 de noviembre de 2004, y es público desde el 28 de noviembre del mismo año. En dicho documento, se concluyó –en lo tocante al actuar de los Consejos de Guerra- que el análisis de los procesos demostró que “actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aún propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio” (p. 177). Asimismo, es conveniente precisar que el Informe Valech II contiene un “Listado de prisioneros políticos y torturados”, en el que incluyó el nombre de Miguel Eduardo Flores Eloz bajo el Registro N° 3082. A este respecto resulta pertinente traer a colación lo señalado por la Excma. Corte Suprema a propósito de una reciente sentencia recaída en un recurso de revisión: “SEXTO: Que, en ese orden de ideas, aparece demostrada la existencia de un método, patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de afrenta a su dignidad, al que fueron sometidos los acusados ante los Consejos de Guerra convocados –dentro de los cuales se encuentran incluidas las impugnantes-, los que fueron cometidos por parte de sus interrogadores, celadores u otros funcionarios que intervinieron en el procedimiento mientras dichos inculpados eran mantenidos detenidos, todo ello con el objeto de obtener su admisión o confesión de los hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al resto de los procesados en los mismos hechos” (Rol N° 79.866-2020). En virtud de lo expresado, sólo cabe concluir que el grave daño a que se refiere el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, vigente a la época de los hechos, se encuentra suficientemente acreditado.

CUARTO: Que, cabe descartar la aplicación del tipo previsto en el artículo 150 N° 1 del Código Penal, debido a que la aplicación del tormento que sufrió la víctima se encuentra subsumida como una de las variantes del daño configurador de uno de los elementos del tipo penal de secuestro con grave daño.

EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. -

QUINTO: Que, en lo principal de la presentación de fojas 367, el abogado don Carlos Portales Astorga, en representación de los encausados, opone excepciones de previo y especial pronunciamiento. En lo referente a la amnistía, contemplada en el D.L. N° 2191, manifiesta que la doctrina y jurisprudencia ha entendido que dictada una ley de amnistía ha de tenerse por anulado el carácter delictuoso del hecho y por eliminada toda consecuencia penal que para los responsables derive de él. Asegura que no ha habido acto legislativo ni para interpretar su alcance ni para su eventual derogación. A mayor abundamiento, resulta frecuente la afirmación antojadiza y sin mayor estudio de que esta institución estaría prohibida en virtud de los tratados internacionales. Afirma que no existe Tratado Internacional alguno que prohíba la aplicación de la institución de la amnistía, por el contrario, la Convención de Ginebra es clara al señalar que “a la cesión de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privados de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. En lo relativo a la prescripción, sostiene que las acciones referidas a los sucesos investigados se encuentran prescritas, en atención a que al momento de ejercerse la acción había pasado el plazo de 10 años que exige la ley. Explica que la prescripción penal es una institución jurídica de común aplicación en nuestro país y entre los fundamentos de su existencia está el hecho de que ella opera por el simple transcurso del tiempo con el fin de lograr la paz social y la seguridad jurídica. Refiere que algunos tratadistas agregan la “Teoría de la Enmienda” o presunción de buena conducta del posible penalmente responsable, la que se ve reafirmada con la exclusión del beneficio ante la posible comisión de un nuevo delito. Agrega que en muchos casos el inculpado no ha ejercido su derecho a defensa, ya sea por desconocer que existe una investigación o porque en el proceso nada se ha resuelto o hecho respecto de él. A lo anterior, suma la inactividad defensiva de quien es inocente de los hechos. Apunta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 del Código Penal, la prescripción se suspende desde el momento que se dirige el procedimiento contra

el posible responsable y, entre las posibles interpretaciones de esta expresión, sostiene que la suspensión del plazo de prescripción se produce desde que se inicia la investigación criminal, siempre y cuando exista un inculpado respecto del cual operaría la suspensión, siendo esta la opinión mayoritaria en la doctrina nacional y en la jurisprudencia. En resumen, señala que el plazo de 10 años que dispone el artículo 94 del Código Penal ha transcurrido sin que hubiera operado la suspensión de la prescripción. Afirma que carece de fundamento la afirmación en cuanto a que los Tratados Internacionales vigentes en Chile prohíban la aplicación de una Ley de Amnistía o las normas sobre prescripción, y que la disposición constitucional (artículo 5°) otorgue rango constitucional a los Convenios, modificando tácitamente la Ley Fundamental cuando colisionen en alguna materia. Agrega que el inciso segundo del artículo 5 no significó una modificación al principio de la supremacía constitucional, por lo que, si un convenio vulnera normas constitucionales, para poder ser aprobado, requerirá de una reforma constitucional. Respecto a la validez de una Ley de Amnistía o de prescripción en relación con los distintos tratados internacionales de derecho humanitario, destaca en relación con su aplicación, que debe tratarse de convenios ratificados y vigentes en Chile, de lo contrario, se viola el principio de legalidad. Destaca que las disposiciones de un Tratado son aplicables desde su publicación en el Diario Oficial, en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal, consagrado en la Carta Fundamental y en el artículo 18 del Código Penal. Refiere también al artículo 28 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Luego de explicar los principios de legalidad, de reserva y prohibición de analogía en materia penal, expresa que hay una grave violación a la Constitución, a la ley y a los propios tratados que cometen los magistrados, que aplican a los procesos que conocen convenios no vigentes en Chile, o simples resoluciones o acuerdos de la ONU, omitiendo la aplicación de leyes vigentes que extinguen la responsabilidad penal. Manifiesta en cuanto a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad (1968), que no se encuentra vigente en Chile, además de ratificarse en el futuro, lo será para hechos perpetrados con posterioridad a su promulgación; en relación con el Tratado sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), no se encuentra vigente, al igual que el anterior. Aduce que el artículo 18 de la Convención de Viena establece que a partir de la firma de un Tratado y mientras no se manifieste la intención de llegar a ser parte “Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustre el objeto y fin de un tratado”. Hace presente

que el objeto y fin de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas es que los Estados tipifiquen y sancionen el delito de desaparición forzada de personas y esta obligación surge cuando los Estados manifiestan su consentimiento en obligarse por el tratado mediante la ratificación. Señala que la firma del ejecutivo, estampada el 9 de junio de 1994, ha cumplido el papel de adoptar el texto de la Convención y dejar al Estado en condición de poder ratificar y, por tanto, al no mediar la ratificación no han podido surgir las obligaciones sustantivas. Expresa que el artículo 18 establece una obligación limitada que consiste en abstenerse de actos que hagan que la posterior ratificación del tratado, si es que llega a producirse, carezca de sentido, citando al redactor del proyecto final de la convención, Sir Humphrey Waldock. En cuanto a la Convención Americana sobre derechos Humanos, señala que la única jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin hacer mención aún sobre la reserva a los reconocimientos de competencia que efectuó el gobierno de Chile, dice relación con la interpretación y aplicación de la Convención denominada Pacto de San José de Costa Rica. No existe antecedente alguno en el articulado del Tratado respecto a que los Estados se encuentren inhibidos en sus facultades soberanas a perdonar la transgresión a alguno de los derechos reconocidos en la Convención, ya sea mediante una ley de amnistía o un indulto, ya que los tribunales no pueden aplicar dicha amnistía o la prescripción, en las causas que conocen, así tampoco hay referencia a crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Indica que estas son materia de otros tratados no vigentes en Chile si a lo anterior agrega que al suscribir el Convenio Chile estableció una reserva que indica “el Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este instrumento de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990”, aunque artificialmente se quisiera ampliar la competencia de la Corte, los hechos a que hace referencia en su fallo quedan fuera de su jurisdicción, careciendo de base jurídica el hecho que el fallo en que se aplicó la amnistía sea posterior a la vigencia del tratado ya que los hechos se juzgan y fallan de acuerdo a la legislación vigente a la fecha de ocurridos, siendo indiferente los años que éste se demore en dictarse, salvo que en dicho lapso se dicte una ley más favorable que obviamente, el tribunal estaría obligada a aplicarla. En cuanto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, apunta que sus disposiciones son muy similares a los de la Convención Americana, por lo que lo antes señalado es válido para este Tratado,

su aplicación es respecto a hechos acaecidos con posterioridad al 27 de mayo de 1989. En relación con el Convenio Sobre la Tortura, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 26 de noviembre de 1988, expresa que en su artículo 2 define la tortura como todo acto intencional por el cual se infrinja a una persona, penas o sufrimientos físicos o mentales. El artículo 3 establece que son responsables del delito sólo los empleados públicos o quienes, sin serlo, actúan bajo las órdenes o instigados por ellos. Precisa que no existe disposición alguna en el Tratado que se refiera a algún impedimento para amnistiar o aplicar la prescripción a los ilícitos allí establecidos. Al respecto, Chile, con mucha anterioridad al convenio, tiene incorporado el delito en su legislación, en el artículo 150 del Código Penal y en el 330 del Código de Justicia Militar, en el evento de querer invocarse el Convenio debe tratarse de hechos cuya ocurrencia haya sido posterior al 26 de noviembre de 1988. En cuanto a los Convenios de Ginebra, señala que el convenio deja en claro que para que pueda aplicarse, debe tratarse de partes en conflicto bien definidas y diferenciadas. Afirma que, los conflictos a que se refiere el N° 1 del artículo 1 del Protocolo II son aquellos que se producen dentro del territorio entre fuerzas bélicas, es decir, entre sus FF.AA y FF.AA disidentes o grupos armados organizados, por lo que debe tratarse de un conflicto bélico, ya que como expone el N° 2 del mismo precepto, el convenio no se aplica a tensiones internas o actos de violencia sin las características antes definidas. Refiere al artículo 1 del D.L. N° 5 que declaró el Estado de Guerra y aduce que se colige que interpreta el artículo 148 del Código de Justicia Militar para el sólo efecto de aplicar la legislación de tiempo de guerra, ya sea para su penalidad como para el funcionamiento de los tribunales de tiempo de guerra, sin que en realidad concurrieran los presupuestos de un conflicto bélico. Añade que el D.L. N° 641 de 1974 derogó el estado de guerra ficticio y el estado de sitio lo decretó en grado de defensa interna, un grado menor al de guerra interna o externa, de acuerdo con la sistematización que de dicho estado de emergencia efectuó su artículo 5, es decir, ni siquiera en forma ficta se puede sostener que existió estado de guerra con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Señala que cuando los tratados de Ginebra enumeran los actos ilícitos prohibidos en contra de civiles o prisioneros en un conflicto armado no internacional, están reiterando en la práctica hechos delictivos tipificados en la legislación de la gran mayoría de los países y al indicar que ninguna parte contratante podrá exonerarse a sí misma, ni exonerar a otra parte contratante respecto de dichas infracciones o ilícitos, no está significando que no pueda

perdonar con posterioridad a los infractores. Expresa que si así se entendiera se produciría una contradicción con el protocolo señalado, que es parte integrante de los Convenios, en los que insta a conceder la amnistía más amplia posible al término del conflicto. Señala que, en resumen, el Convenio sobre el Genocidio, el Tratado sobre la Tortura y el Pacto de San José de Costa Rica son inaplicables a los hechos acaecidos durante el Gobierno Militar, pero, además, ninguno de ellos en el evento de serlo, impiden que se apliquen la amnistía o prescripción. Afirma que prueba indiscutible que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad no se encuentra vigente en Chile lo aporta la Asamblea General de la ONU, en la Resolución N° 2391 de 26 de noviembre de 1968, en la cual se acordó dictar dicha convención. Señala que, en uno de los acápites del preámbulo al convenio, la Asamblea advierte que la aplicación a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las normas del derecho interno de los países relativa a la prescripción de los delitos impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de estos crímenes. Confirma lo anterior el hecho que el día 18 de julio de 2009 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.357, que tipifica y penaliza los crímenes de lesa humanidad de guerra y el genocidio, que en su artículo 40 señala que la acción penal y la pena previstos en la ley no prescriben y a su vez, el artículo 44 indica que los hechos de que trata la ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. Concluye que en Chile no se encontraban tipificados los delitos contenidos en la Ley 20.357 con anterioridad a su promulgación.

SEXTO: Que, en primer lugar, cabe señalar que el delito contemplado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal vigente a la época de los hechos, de acuerdo con los hechos que lo fundamentan, configura un delito o crimen de lesa humanidad. A este respecto, corresponde traer a colación lo que ha señalado la Excm. Corte Suprema en sentencia dictada en autos Rol 14.594-2019, en orden a que “en el estado actual de la historiografía nacional, ratificada por innumerables investigaciones y sentencias judiciales, es un hecho público y notorio -que, por tanto, dispensa de probarlo-, que en nuestro país, desde el 11 de septiembre de 1973 y por varios años después, diversos organismos e instituciones estatales, estuvieron al servicio, o actuaron como parte, brazos o auxiliares, de una estructura destinada a la represión generalizada de miles de compatriotas,

principalmente por su pensamiento político adverso al régimen militar imperante, pero también por diversas otras incomprensibles razones”.

Entonces, en la especie se está ante un delito cometido dentro del contexto de un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos fundamentales. En esos términos, corresponde aplicar normas de derecho internacional consuetudinario, es decir, principios generales del derecho, con independencia de su consagración en tratados internacionales propios del tema. Esas normas consuetudinarias advierten conductas prohibidas en términos absolutos, las cuales constituyen normas imperativas o *ius cogens* y, por supuesto, obligatorias para toda la humanidad, y corresponden a normas del derecho internacional general, inexcusables y vinculantes, que no pueden derogarse sino por una norma de la misma entidad. En el caso se trata de crímenes de lesa humanidad, por cuanto se cometieron una serie de actos delictivos de la mayor gravedad contra la humanidad, entre ellos, el encierro sin derecho y contra la voluntad, acompañado de tortura, todo ello en el entendido de que este delito se cometió como parte del ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, en conocimiento sus autores de dicho ataque y que ello constituyó una práctica habitual en los funcionarios, tanto de los organismos de inteligencia como de las instituciones armadas y policiales, todo asimilable a lo que señala el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, consagrado en nuestro concepto por el artículo 5º de la Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Que, establecida la configuración de un delito de lesa humanidad, ello trae aparejadas las consecuencias jurídicas que dicha declaración conlleva, esto es, inaplicar dos instituciones jurídicas propias del derecho penal, como son la amnistía y la prescripción de la acción penal.

En efecto, no cabe aplicar las normas de prescripción internas del país, sino que operan las normas internacionales que se refieren a la imprescriptibilidad en este tipo de delitos, pues ello es un imperativo del derecho y una manifestación patente del Derecho Penal Humanitario en esta materia. No es posible concebir que puedan cometerse impunemente delitos por agentes del Estado y que el régimen haga todo lo posible para que esos delitos no se investiguen y menos sancionen, y luego invocar las normas que permitirían la prescripción tratándose de delitos comunes. En este sentido, la Excma. Corte Suprema en el fallo dictado en la causa Rol 559-2004 indica “12°...la denominada “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa

Humanidad”, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución N° 2.391 (XXIII), de 26.11.1968, en vigor desde el 11.11.1970, pero no ratificada por Chile. Entre los crímenes declarados imprescriptibles, la Convención cita, en su artículo I, las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra, anteriormente aludida. 13°. Que, si bien la norma convencional citada no se encuentra vigente en Chile, nada obstaría al reconocimiento de una norma de derecho consuetudinario y de sello similar que sí pueda vincular al Estado...”, “16°. Que la “universalidad” del principio de imprescriptibilidad, predicada en la Preámbulo de la Convención de 1968, es demostrativa del carácter puramente declarativo que el instrumento internacional asigna a esa institución, el que se refuerza a partir de la simple lectura de su artículo I, en cuanto precisa que los crímenes de guerra (letra a) y de lesa humanidad (letra b) “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. “En otras palabras, la Convención no se limitó a enunciar esta regla, sino que, a afirmarla, mediante su positivación, ya que ella operaba ya a la fecha como derecho consuetudinario internacional. Así, por lo demás, se evidencia en los trabajos preparatorios de la Convención, como queda de manifiesto en los Informes de la Comisión de Derecho Internacional y en la Resolución 3 (XXII), aprobada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas por Resolución 1.158 (XLI), de 5 de agosto de 1966 y Resolución (XXIII) de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1967”. En esta misma línea la Corte Interamericana ha declarado la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como en los fallos dictados en los casos Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Almonacid Arellano, donde se califica el homicidio perpetrado por agentes del Estado en la persona de don Luis Alfredo Almonacid Arellano como un crimen de lesa humanidad, agregando que la prohibición de cometer esta clase de ilícitos “es una norma de ius cogens y la penalización de estos crímenes es obligatoria, conforme al derecho internacional general” (Considerando 99°).

En el mismo fallo citado de la Excma. Corte Suprema se consigna la preferencia de las normas de Derecho Internacional Consuetudinario por sobre las disposiciones de derecho interno en caso de contradicción: “23°. Que la jurisprudencia y doctrina nacionales, desde muy antiguo, han reconocido la prevalencia del Derecho Internacional, en el supuesto de contradecir éste el derecho interno. Valga, en apoyo de este aserto, la referencia a las sentencias “Lauritzen con Fisco” o de los barcos daneses (R.D.J., T. 52, II, 1ª, p. 485 y ss.); el

fallo recaído en un caso sobre extradición activa, en que se explicitó que los principios de Derecho Internacional “priman siempre sobre los preceptos del derecho interno del Estado” (en: R.D.J., T. 56, II, 4ª, pág. 66); los casos Embajada de la República de China, de 1969 (F.M. septiembre de 1969, págs. 223 y 224) y Embajada de Cuba, de 1975 (F.M. junio de 1975, pág. 90) y, en jurisprudencia posterior a los hechos de autos –pero demostrativa de la continuidad del principio que interesa– las sentencias de 26.10.95 (Rol N° 5.566), considerando 14º y 9.09.98 (Rol N° 469/98), considerando 10º, todas de esta Corte Suprema. Y para demostrar la amplia recepción de esta misma tesis, en la doctrina nacional clásica, recordemos que ya don Manuel E. Ballesteros, a fines del siglo XIX, sostenía que “con sólo ser un cuerpo de doctrinas, el Derecho Internacional es, sin embargo, de aplicación preferente a las leyes positivas de carácter interno, en aquellas cuestiones regidas por él” (La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, T. I, Stgo., 1890, pág. 571). Por cierto, los internacionalistas chilenos contemporáneos “Llanos, Benadava, Bustos Valderrama, Nogueira, C. Medina, entre muchos otros” participan plenamente de esta posición...”.

Por otro lado, el paso del tiempo, como fundamento de toda prescripción, está concebida para consolidar situaciones de hecho o dar seguridad a las relaciones de derecho, pero no puede operar en estos casos, en los que precisamente se pretende investigar la ocurrencia de determinados hechos de carácter grave que no sólo afectan a la comunidad interna del país, sino que la conciencia jurídica universal.

OCTAVO: Que, en lo relativo a la excepción de amnistía, cabe adicionar que a la fecha de los hechos se encontraba vigente el DL N° 5, de 12 de septiembre de 1973, el que, fundado en la situación de conmoción interna en que se encontraba el país y en la necesidad de reprimir en la forma más drástica posible las acciones que se estaban cometiendo contra la integridad física del personal de las fuerzas armadas, de Carabineros y de la población en general declaró, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio impuesto por conmoción interna según el DL N° 3 debía entenderse como estado o tiempo de guerra para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo, contenida en el referido Código y demás leyes penales y para todos los efectos de dicha legislación. Dispuso al efecto el citado decreto ley: “ARTÍCULO 1º Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe

entenderse como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y, en general, para los demás efectos de dicha legislación”. Así, como se indicó en el caso Rol N° 559-2004 de la Excma. Corte Suprema “Ciertamente, los Convenios de Ginebra, de 1949, vigentes a la sazón, formaban parte de esa “legislación” adicional, aplicable en estado o tiempo de guerra e incluso en conflictos armados sin carácter internacional, y , entre otros, imponían a los Estados obligados el deber de otorgar un trato humanitario a las personas involucradas, prohibiéndose –en cualquier tiempo y lugar– entre otros, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, además de la tortura o tratos inhumanos, considerados “infracciones graves” a esa normativa internacional...”. En consecuencia, los Convenios de Ginebra indudablemente se encontraban vigentes, porque a la época de los hechos allí investigados, se configuró un conflicto armado sin carácter de internacional, quedando por tanto prohibido para cualquier tiempo y lugar, al tenor del artículo 3, 146, 147 y 148 del Convenio IV, entre otros: los atentados a la vida y a la integridad corporal, y los atentados a la dignidad personal y prohibido auto exonerarse de las responsabilidades penales consecuentes.

NOVENO: En virtud de estas consideraciones, se desestiman las excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía y prescripción de la acción penal, estimándose innecesario valorar el documento agregado a fojas 386, correspondiente a un oficio emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores, relativo a la vigencia de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, atendido lo antes razonado.

EN CUANTO A LA PARTICIPACION DEL ACUSADO VALENTIN RIQUELME VILLALOBOS. -

DECIMO: Que, a fojas 36 presta declaración indagatoria Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, quien expresa que para el año 1973 era profesor e instructor de la Escuela de Infantería de Marina, ubicada en el ex Fuerte Vergara, Viña del Mar, que ahí desempeñó funciones hasta fines de septiembre de 1973, momento en que fue trasladado a la Academia de Guerra Naval (Cuartel Silva Palma); que no le correspondió realizar patrullajes, sólo desempeñaba funciones como interrogador; que llamaron a Infantes de Marina para que tomaran las labores de interrogar, debido a que los Buzos Tácticos que estaban en el Buque Lebu se les pasó la mano con los interrogatorios; que fue interrogador hasta fines de 1975; que siempre

andaba de civil, ya que además hacía labores de espionaje externo; que tiene conocimiento que en la Academia de Guerra Naval había también personal de Carabineros e Investigaciones; que con los interrogatorios buscaban más que nada saber cuáles eran los planes de grupos como el MIR, quienes estaban infiltrados en las Fuerzas Armadas, ubicación de armas, casas seguras, entre otros; que el guardia les llevaba el detenido, quien no venía esposado, ni con signos de maltrato, solo con una venda en sus ojos; que el Suboficial a cargo traía una hoja con las preguntas a hacer al detenido; que al momento de prestar la declaración, se le tomaban los datos personales y se le hacían las preguntas; que quedaba todo escrito y se le hacía firmar la declaración; que esta información se entregaba al Suboficial Leiva, quien la entregaba a análisis; que quienes detenían era personal del grupo de operaciones; que no aplicaban ningún tipo de tortura ni tenían salas para tortura, tampoco recibían órdenes de aplicar algún tipo de trato violento a determinada persona; que nunca tuvo que aplicar violencia o fuerza para obtener declaraciones, incluso interrogó mujeres y siempre el trato fue bueno; que desconoce si a los otros interrogadores se les pasaba la mano; que recuerda que solamente se interrogaba una vez al detenido, dependiendo de si su declaración era suficiente, de acuerdo al análisis que se realizaba; que su horario de trabajo era de 9 a 17 horas, todos los días, de acuerdo a las necesidades de la unidad; que algunas veces le correspondió quedarse hasta más de las 21:00 horas, interrogaban hombres y mujeres, no había adolescentes por lo menos él no los vio; que respecto a la víctima de autos, no recuerda su nombre ni que haya sido interrogado por él; que no recuerda a quien le decían “Taco de Goma” o “Romeo”; que a él le apodaban “huesillo”.

UNDECIMO: Que, en consecuencia, respecto a la participación del acusado Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, si bien en su declaración indagatoria se sitúa en tiempo y lugar en la comisión de los hechos, reconociendo que perteneció al grupo de interrogadores dispuesto en la Academia de Guerra Naval y en el Cuartel Silva Palma; niega en cambio que haya torturado a quienes mantenían encerrados ilícitamente en esos lugares, todo lo cual se desvanece con el mérito de los siguientes antecedentes:

1.- La imputación de la víctima, rolante a fojas 1, mediante la cual atribuye a un grupo de interrogadores del Cuartel Silva Palma las acciones de haberlo golpeado, aplicarle corriente, lugar donde era interrogado violentamente, habiéndose encontrado en ese recinto en septiembre de 1974, lo cual concuerda con

los dichos vertidos en declaración extrajudicial de Juan Humberto Campos Cifuentes, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 356 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 505, quien señaló que desde el verano de 1974, fue destinado de enlace a la Academia de Guerra Naval, en el Departamento de Análisis, y recuerda que en una ocasión al entrar repentinamente a una salita del Cuartel Silva Palma, sorprendió a Ricardo Riesco –Teniente Infante de Marina reconocido como jefe del grupo de interrogadores- torturando a una persona en una cama de huinchas, conocida como “parrilla”, en las cuales se aplicaba electricidad.

2.- Imputaciones contenidas en declaraciones judiciales prestadas por Germán Eduardo Santana Boza, de fojas 125, y Ángel Saldomando Díaz, de fojas 148, quienes señalan que también fueron sometidos a interrogatorios bajo apremios ilegítimos por un grupo de interrogadores del Cuartel Silva Palma, junto con Miguel Flores, siendo juzgados los tres en la misma causa naval.

3.- Las imputaciones contenidas en declaraciones extrajudiciales referidas en informes policiales de la causa traída a la vista como medida para mejor resolver Rol 948-2006, de Alfredo Saieg, cuya copia se agregó a fojas 523, de Rodrigo Alcázar Zuanich, cuya copia rola a fojas 606, de Carlos Rivero Espínola, cuya copia rola a fojas 525, y copia de declaración judicial prestada en la misma causa por Abelardo Zamorano Barrera de fojas 519, dando cuenta que estuvieron detenidos en el Cuartel Silva Palma y que un grupo de interrogadores los sometió a graves torturas. Asimismo, la imputación del mencionado Alcázar Zuanich en la causa rol 83-2016, vertida en declaración judicial, cuya copia se agregó a fojas 529, quien indicó que encontrándose detenido en el Cuartel Silva Palma, lo llevaron a una sala de interrogatorio, le aplicaron corriente y le hicieron tortura psicológica y que tiene conocimiento que en el Cuartel Silva Palma cumplía funciones Ricardo Riesco, lo que sabe porque fue él quien allanó su casa, además su madre lo conoce, porque cuando allana su casa él se presenta y ella lo conocía y también a su familia; que recuerda a alguien que llamaba “Telémaco” –quien corresponde a Juan de Dios Reyes Basaur, según consigna el informe policial de fojas 237.

4.- La imputación contenida en el Informe Policial de la Brigada Investigadora de Delitos de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 96, que comunica la nómina del personal de la Armada de Chile asignado al organismo de seguridad denominado “Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de Valparaíso”

(SICAJSI-VALPO) a contar del 11 de septiembre de 1973 y que cumplieron funciones de interrogadores tanto en la Academia de Guerra Naval como en el Cuartel Silva Palma, entre otros, Juan de Dios Reyes Basaur y Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, entre otros.

5.- Los dichos contenidos en la declaración judicial de Ricardo Riesco Cornejo a fojas 24, en que reconoce que los que participaban como interrogadores habían hecho cursos en el exterior, era gente experta y estaban entrenados en la aplicación de torturas en los interrogatorios. En el mismo sentido, Jaime Segundo Lazo Pérez, actualmente fallecido, quien en su declaración judicial contenida en fojas 10, reconoce que integró un grupo de interrogadores, Infantes de Marina, que ocupaban las instalaciones en el Cuartel Silva Palma y de la Academia de Guerra Naval.

6.- Los dichos de Bertalino Castillo Soto, quien en declaración judicial de fojas 14 y en declaración extrajudicial que rola a fojas 394 de la causa penal 144.133-2013 traída a la vista, cuya copia rola a fojas 517 vuelta, expresó que a los interrogadores Infantes de Marina, que eran 7 u 8, los designaron de las personas que tenían el curso especial realizado en el extranjero, recordando que integraban este grupo de interrogadores Juan Reyes Basaur, Francisco Prado Espejo, Jaime Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez.

7.- Los dichos contenidos en declaración judicial de Juan Jorquera Terrazas, de fojas 78, quien reconoce su calidad de interrogador en la Academia de Guerra Naval junto a otros compañeros que llegaron desde Estados Unidos, en San Diego, California, donde hicieron unos cursos de Infantes de Marina y les enseñaron técnicas de interrogatorio, entre ellos Bertalino Castillo, Juan Reyes Basaur, Manuel Leiva, Francisco Prado, haciendo presente que en esos cursos les enseñaban aplicación de torturas y que había interrogadores que hacían cosas malas; asimismo declaración extrajudicial vertida en la causa rol 144.133-2013, rolante a fojas 512 de esos autos, cuya copia rola a fojas 513 vuelta, quien reconoce a Valentín Riquelme, Juan Reyes, Jaime Lazo, Bertalino Castillo como parte del grupo de interrogadores del Cuartel Silva Palma, todos vestían de civil y se identificaban con nombres supuestos o apodos, y al Teniente Riesco como jefe de los interrogadores, lo que le consta porque él también integraba este grupo especial de interrogadores.

8.- Los dichos de Juan Manuel Jofré Montenegro, contenidos en declaración extrajudicial prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como

medida para mejor resolver, rolante a fojas 508 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 511 vuelta, quien señaló que había un grupo encargado de esas labores –de interrogatorio- practicadas por Infantes de Marina, de entre quienes recuerda a uno llamado Manuel Leiva, conocido por ser uno de los primeros Infantes de Marina en haber ido a cursar a Panamá; al “Cicerón”, al “Telémaco” y al “Sócrates”, todos de alrededor de 40 años.

En conclusión, existe presunciones que, cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por establecida la participación dolosa del acusado Valentín Evaristo Riquelme Villalobos como autor del delito de secuestro con grave daño contemplado en el artículo 141 incisos primero y tercero del Código Penal en su redacción vigente a la fecha de comisión de los hechos, situándose a este acusado con una participación activa en el tiempo y lugar de éstos, y existiendo múltiples antecedentes que de manera invariable y conteste permiten tener por establecido que Riquelme formó parte del grupo de interrogadores que se encontraba permanentemente en el Cuartel Silva Palma, a cargo de quien fuera coacusado en estos autos, Ricardo Riesco Cornejo, actualmente fallecido, manteniendo a quienes llegaban detenidos a ese lugar, encerrados contra su voluntad y sin orden de detención que lo justificara, entre ellos a la víctima de autos y que, al interrogarlos, los sometían a la aplicación de sistemáticas y graves torturas y apremios físicos y psicológicos.

EN CUANTO A LA PARTICIPACION DEL ACUSADO JUAN DE DIOS REYES BASAUR. -

DUODECIMO: Que, a fojas 19 presta declaración indagatoria el acusado Juan de Dios Reyes Basaur, expresa que se desempeñaba como profesor e instructor de la Escuela de Infantería de Marina, ubicada en el ex Fuerte Vergara, en Viña del Mar, ahí desempeñó funciones hasta el 11 de septiembre de 1973, siendo luego trasladado al Cuartel Silva Palma, ubicado a un costado de la Academia de Guerra Naval, donde estuvo destinado hasta los primeros días de enero de 1975, desempeñando funciones de interrogador; precisa que sólo ejerció funciones en el Cuartel Silva Palma; que tiene conocimiento que en la Academia de Guerra Naval había personal del Carabineros e Investigaciones; que con los interrogatorios buscaban más que nada saber sobre la ubicación de armas, de explosivos, de qué grupo político era, si sabía quiénes estaban realizando actos contra el gobierno y sobre posibles atentados a nivel nacional; que el guardia les

traía el detenido, quien no venía esposado, ni con signos de maltrato, solo con una venda en los ojos; que el Suboficial a cargo traía una hoja de pauta con las preguntas a hacer al detenido; que al momento de prestar la declaración se le tomaban los datos personales y se le hacían las preguntas, quedaba todo escrito y se le hacía firmar la declaración al detenido; que no aplicaban tortura, ni ningún sistema violento, ya que eran compatriotas, que estaban en bandos o lados distintos; que recuerda que solamente se les interrogaba una vez; que su horario de trabajo era de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes; que algunas veces le correspondió quedarse hasta más de las 21:00; que solo interrogaban hombres, nunca mujeres ni niños o adolescentes; que había mujeres detenidas, pero eran otros los asignados; que tampoco había adolescentes detenidos, por lo menos no los vio; que respecto a la víctima, no recuerda su nombre, ni que haya sido interrogado por él; que tampoco recuerda haber escuchado de alguien los hechos ocurridos al señor Flores.

DECIMOTERCERO: Que, en consecuencia, respecto a la participación del acusado Juan de Dios Reyes Basaur, si bien en su declaración indagatoria se sitúa en tiempo y lugar en la comisión de los hechos, reconociendo que fue interrogador en el Cuartel Silva Palma; niega en cambio que haya torturado a quienes mantenían encerrados en esos lugares, todo lo cual se desvanece con el mérito de los mismos antecedentes que inculpan al acusado anterior, esto es:

1.- La imputación de la víctima, rolante a fojas 1, mediante la cual atribuye a un grupo de interrogadores del Cuartel Silva Palma las acciones de haberlo golpeado, aplicarle corriente, lugar donde era interrogado violentamente, habiéndose encontrado en ese recinto en septiembre de 1974, lo cual concuerda con los dichos vertidos en declaración extrajudicial de Juan Humberto Campos Cifuentes, prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 356 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 505, quien señaló que desde el verano de 1974, fue destinado de enlace a la Academia de Guerra Naval, en el Departamento de Análisis, y recuerda que en una ocasión al entrar repentinamente a una salita del Cuartel Silva Palma, sorprendió a Ricardo Riesco –Teniente Infante de Marina reconocido como jefe del grupo de interrogadores- torturando a una persona en una cama de huinchas, conocida como “parrilla”, en las cuales se aplicaba electricidad.

2.- Imputaciones contenidas en declaraciones judiciales prestadas por Germán Eduardo Santana Boza, de fojas 125, y Ángel Saldomando Díaz, de fojas

148, quienes señalan que también fueron sometidos a interrogatorios bajo apremios ilegítimos por un grupo de interrogadores del Cuartel Silva Palma, junto con Miguel Flores, siendo juzgados los tres en la misma causa naval.

3.- Las imputaciones contenidas en declaraciones extrajudiciales referidas en informes policiales de la causa traída a la vista como medida para mejor resolver Rol 948-2006, de Alfredo Saieg, cuya copia se agregó a fojas 523, de Rodrigo Alcázar Zuanich, cuya copia rola a fojas 606, de Carlos Rivero Espínola, cuya copia rola a fojas 525, y copia de declaración judicial prestada en la misma causa por Abelardo Zamorano Barrera de fojas 519, dando cuenta que estuvieron detenidos en el Cuartel Silva Palma y que un grupo de interrogadores los sometió a graves torturas. Asimismo, la imputación del mencionado Alcázar Zuanich en la causa rol 83-2016, vertida en declaración judicial, cuya copia se agregó a fojas 529, quien indicó que encontrándose detenido en el Cuartel Silva Palma, lo llevaron a una sala de interrogatorio, le aplicaron corriente y le hicieron tortura psicológica y que tiene conocimiento que en el Cuartel Silva Palma cumplía funciones Ricardo Riesco, lo que sabe porque fue él quien allanó su casa, además su madre lo conoce, porque cuando allana su casa él se presenta y ella lo conocía y también a su familia; que recuerda a alguien que llamaba “Telémaco” –quien corresponde a Juan de Dios Reyes Basaur, según consigna el informe policial de fojas 237.

4.- La imputación contenida en el Informe Policial de la Brigada Investigadora de Delitos de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 96, que comunica la nómina del personal de la Armada de Chile asignado al organismo de seguridad denominado “Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de Valparaíso” (SICAJSI-VALPO) a contar del 11 de septiembre de 1973 y que cumplieron funciones de interrogadores tanto en la Academia de Guerra Naval como en el Cuartel Silva Palma, entre otros, Juan de Dios Reyes Basaur y Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, entre otros.

5.- Los dichos contenidos en la declaración judicial de Ricardo Riesco Cornejo a fojas 24, en que reconoce que los que participaban como interrogadores habían hecho cursos en el exterior, era gente experta y estaban entrenados en la aplicación de torturas en los interrogatorios. En el mismo sentido, Jaime Segundo Lazo Pérez, actualmente fallecido, quien en su declaración judicial contenida en fojas 10, reconoce que integró un grupo de interrogadores, Infantes de Marina, que

ocupaban las instalaciones en el Cuartel Silva Palma y de la Academia de Guerra Naval.

6.- Los dichos de Bertalino Castillo Soto, quien en declaración judicial de fojas 14 y en declaración extrajudicial que rola a fojas 394 de la causa penal 144.133-2013 traída a la vista, cuya copia rola a fojas 517 vuelta, expresó que a los interrogadores Infantes de Marina, que eran 7 u 8, los designaron de las personas que tenían el curso especial realizado en el extranjero, recordando que integraban este grupo de interrogadores Juan Reyes Basaur, Francisco Prado Espejo, Jaime Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez.

7.- Los dichos contenidos en declaración judicial de Juan Jorquera Terrazas, de fojas 78, quien reconoce su calidad de interrogador en la Academia de Guerra Naval junto a otros compañeros que llegaron desde Estados Unidos, en San Diego, California, donde hicieron unos cursos de Infantes de Marina y les enseñaron técnicas de interrogatorio, entre ellos Bertalino Castillo, Juan Reyes Basaur, Manuel Leiva, Francisco Prado, haciendo presente que en esos cursos les enseñaban aplicación de torturas y que había interrogadores que hacían cosas malas; asimismo declaración extrajudicial vertida en la causa rol 144.133-2013, rolante a fojas 512 de esos autos, cuya copia rola a fojas 513 vuelta, quien reconoce a Valentín Riquelme, Juan Reyes, Jaime Lazo, Bertalino Castillo como parte del grupo de interrogadores del Cuartel Silva Palma, todos vestían de civil y se identificaban con nombres supuestos o apodos, y al Teniente Riesco como jefe de los interrogadores, lo que le consta porque él también integraba este grupo especial de interrogadores.

8.- Los dichos de Juan Manuel Jofré Montenegro, contenidos en declaración extrajudicial prestada en la causa penal Rol N° 144.133-2013 tenida a la vista como medida para mejor resolver, rolante a fojas 508 de esos autos, cuya copia se agregó a fojas 511 vuelta, quien señaló que había un grupo encargado de esas labores –de interrogatorio- practicadas por Infantes de Marina, de entre quienes recuerda a uno llamado Manuel Leiva, conocido por ser uno de los primeros Infantes de Marina en haber ido a cursar a Panamá; al “Cicerón”, al “Telémaco” y al “Sócrates”, todos de alrededor de 40 años.

En conclusión, existe presunciones que, cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por establecida la participación dolosa del acusado Juan de Dios Reyes Basaur como autor del delito de secuestro con grave daño contemplado en el

artículo 141 incisos primero y tercero del Código Penal en su redacción vigente a la fecha de comisión de los hechos, situándose a este acusado con una participación activa en el tiempo y lugar de éstos y existiendo múltiples antecedentes que, de manera invariable y conteste, permiten tener por establecido que Reyes formó parte del grupo de interrogadores que se encontraba permanentemente en el Cuartel Silva Palma, a cargo de quien fuera coacusado en estos autos, Ricardo Riesco Cornejo, actualmente fallecido, manteniendo a quienes llegaban detenidos a ese lugar, encerrados contra su voluntad y sin orden de detención que lo justificara, entre ellos a la víctima de autos y que al interrogarlos, los sometían a la aplicación de sistemáticas y graves torturas y apremios físicos y psicológicos.

DECIMOCUARTO: Que en consecuencia, cabe calificar la autoría de los acusados Valentín Riquelme Villalobos y Juan de Dios Reyes Basaur como autores inmediatos y directos en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, del delito de secuestro con grave daño, contemplado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, vigente a la época de los hechos, por cuanto de los antecedentes reseñados en los fundamentos precedentes, se establece que los acusados tomaron parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa, esto es, formando parte del grupo especial de funcionarios de la Infantería de Marina que interrogó a Miguel Flores Elos, manteniéndolo encerrado sin motivo justificado, y sometiéndolo a sistemáticas y graves torturas.

CONTESTACION DE LA ACUSACION. -

DECIMOQUINTO: Que, en el primer otrosí de la presentación de fojas 367 el abogado don Carlos Portales Astorga contesta la acusación pidiendo en primer término que se dicte sentencia absolutoria por cuanto la acción penal se encuentra extinguida por la prescripción y amnistía en virtud del D.L. N° 2191 de 1978, dando por reproducida toda la parte pertinente de lo principal de la presentación y renovando por tanto las excepciones de amnistía y prescripción como defensas de fondo.

Enseguida alega que sus representados en parte alguna de sus declaraciones han reconocido el haber participado en los delitos objeto de la acusación, la cual no les atribuye participación como autores, cómplices ni encubridores, ni menciona quien o quienes mantuvieron encerrada a la víctima en el Cuartel Silva Palma. Expresa que resulta asombroso que se indique que fue detenida la víctima en el Liceo Nocturno de Playa Ancha por personal de carabineros que vestía de civil, sin que se haya efectuado investigación alguna para determinar a los verdaderos

autores de este ilícito. Asevera que no basta para atribuir participación las meras suposiciones, como es el hecho de haber pertenecido a la Armada de Chile y haberse desempeñado en alguna de las reparticiones señaladas.

Señala a continuación que no se dan en la especie los elementos que configuran los delitos. Explica que el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal citado en la acusación exige que el encierro se prolongue por más de 90 días o si de ellos resultare un grave daño a la persona o intereses del encerrado. Indica con respecto a la primera hipótesis exigida por el tipo penal, que no se desprende ni se encuentra acreditado en autos que la víctima estuviese más de 90 días continuos en situación de detenida, ya que según se señala, estuvo detenida por personal de la Armada sólo dos semanas en dependencias de la armada a contar de fines de agosto de 1974, para posteriormente ser trasladada a la Cárcel de Valparaíso por espacio de 9 meses, respecto de esta última detención nada tiene que ver, ni relación alguna con el personal de la Armada, ya que dicho lugar se encuentra hasta el día de hoy bajo control de Gendarmería de Chile. En lo concerniente a la segunda hipótesis, manifiesta que no se encuentra acreditado el daño grave a la persona o intereses del encerrado o detenido, de tal manera que tampoco se puede alegar esta causal para calificar el delito, como no sean los propios dichos de la víctima. En consecuencia, afirma que sin perjuicio que no se encuentra acreditada la participación, en el mejor de los casos se estaría en presencia del delito de secuestro simple, tipificado en el inciso primero del artículo 141 del Código Penal. Apunta que no puede pasar por alto que la acusación se refiere a dos delitos por situaciones similares y genéricas de daño físico, es decir, ambas figuras penales contemplan una misma conducta (daño físico), esto es, se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, en atención a que una misma conducta no puede sindicarse en dos ocasiones para ser tipificada en dos ilícitos distintos.

A continuación, explica en relación al elemento de culpabilidad del delito, que en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile la obediencia es funcional, el Código de Justicia Militar señala en los artículos 334 y 335 el deber de obediencia y la posibilidad de representar y suspender la orden equivocada o ilícita pero concluye en el deber de cumplirla si el superior insiste en que se cumpla; que por otra parte, los artículos 336 y 337 del mismo Código establecen penas por el incumplimiento de ese deber, las que se agravan de ocurrir la infracción ante el enemigo, hasta la reclusión militar perpetua y la muerte. Señala que, en atención a lo anterior, se atenúa la responsabilidad de los subordinados, y el artículo 214 del

Código de Justicia Militar señala que cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio, y que el superior que la hubiera impartido será el único responsable, salvo el caso de concierto previo, en que serán responsables todos los concertados. Puntualiza que el inferior que, fuera del caso de excepción a que se refiere la parte final del inciso anterior, se hubiere excedido en su ejecución o si, tendiendo la orden notoriamente a la perpetración de un delito, no hubiere cumplido la formalidad del artículo 335, será castigado con la pena inferior en un grado a la asignada por la ley al delito. Señala que en el supuesto evento que sus representados hubiesen participado en los hechos, se pregunta, porque sus representados tendrían que haber representado, en los términos del artículo 335 del Código de Justicia Militar, a su superior jerárquico la orden de mantener detenida a la víctima en el Cuartel Silva Palma, en circunstancias que se actuaba dentro de un completo marco legal y jurídico. Manifiesta que, en el caso de autos, sus representados se vieron compelidos a una situación de obediencia forzada, esto es, el hecho de haber tenido que someterse a una orden emanada de su superior jerárquico, la que incluso estaba respaldada por todo el ordenamiento jurídico y legal de la época. Por consiguiente, alega la atenuante específica del artículo 211 del Código de Justicia Militar, sin perjuicio de que a su juicio se encuentra en la imposibilidad fáctica y jurídica de efectuar un juicio de reproche respecto de sus representados, careciendo en consecuencia de la culpabilidad necesaria para ser condenados en atención a la no exigibilidad de una conducta distinta.

Enseguida, esgrime que no se configura el delito de secuestro, pues demostrará que se actuó con derecho en la privación de libertad de la víctima, no obstante, no haber tenido participación alguna en el principio de ejecución del delito, ya que la víctima fue detenida por personal de Carabineros y así lo señala la acusación. Este derecho emana de los siguientes antecedentes:

1.- La Ley N° 17.798 (Ley de Control de Armas), que los facultaba para allanar y detener. Aduce que en su artículo 19 establecía en su letra a) que, en casos graves y urgentes, los Tribunales podrán ordenar la práctica de cualquiera de las diligencias señaladas en el párrafo 3° del Título III del Libro II del Código de Procedimiento penal, con respecto a los lugares, habitados o no, en los que se presuma la existencia clandestina de cualquiera de los elementos referidos en el artículo 2° o de la comisión del delito señalado en el artículo 8° de la presente ley. Estas diligencias serán cumplidas por el cuerpo de Carabineros, por las Fuerzas

Armadas o por ambos a la vez, si las circunstancias lo aconsejaren y según lo ordene el respectivo mandamiento. Y más adelante agrega será siempre ministro de fe de esta diligencia el jefe a cargo de la Fuerza Pública a cargo de su cumplimiento.

2) El D.L. N° 77 en el artículo 1° prohibió y “en consecuencia serán consideradas asociaciones ilícitas, los partidos Comunista o Comunista de Chile, Socialista, Unión Socialista Popular, Mapu, Radical, Izquierda Cristiana, Partido de la Unidad Popular y todas aquellas entidades, agrupaciones, facciones o movimientos que sustenten la doctrina marxista o que por sus fines, o por la conducta de sus adherentes sean sustancialmente coincidentes con los principios y objetivos de dicha doctrina y que tiendan a destruir o desvirtuar los propósitos y postulados fundamentales que se consignan en el Acta de Constitución de la Junta”. En el artículo 2° establecía “las acciones ilícitas a que se refiere el artículo anterior importan un delito que existe por el solo hecho de organizarse, promoverse o inducirse a su organización”. En el artículo 3° agregaba “prohíbese toda acción de propaganda, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, de la doctrina marxista o de otra sustancialmente concordante con sus principios y objetivos”. Por lo tanto, apunta que no se puede afirmar que al arrestar o detener a una persona, se careciera de la facultad legal y la autoridad para disponerlo, y en consecuencia actuaban con derecho y dentro del marco legal vigente. Y aunque la víctima eventualmente no se encontrase en los supuestos anteriormente señalados, tiene presente la dramática realidad subversiva que vivía el país durante los primeros años del gobierno militar lo que indudablemente ocasionaba mucha confusión. Concluye que en la tipificación del delito objeto de la acusación falta un elemento del tipo de naturaleza normativa lo que imposibilita la existencia del delito de secuestro tipificado en el artículo 141 del código penal.

Agrega que, respecto del segundo ilícito, esto es, aplicación de tormentos, no hay prueba, presunción, ni indicios que señalen participación de sus representados en dicho ilícito.

Termina señalando que, a los empleados públicos, encargados del cumplimiento de las órdenes de detención o arresto, en el cumplimiento de estas, eventualmente pudieran haberse excedido, no les es aplicable las disposiciones del artículo 141 relativo al secuestro, porque éstos no actuaban como particulares y además tenían la facultad legal de efectuarlo.

DECIMOSEXTO: Que se desestimaré como defensa de fondo la petición que se declare la amnistía y la prescripción de la acción penal, respecto a lo cual deberá estarse a lo razonado en los considerandos sexto, séptimo y octavo, los que se dan por reproducidos.

DECIMOSEPTIMO: Que, cabe señalar que una atenta lectura del auto acusatorio permite deducir claramente cuáles son los hechos que constituyen los cargos formulados y que se atribuyen a los acusados, quienes eran miembros de Infantería de Marina perteneciente a un grupo especialmente dispuesto, tanto en la Academia de Guerra Naval como en el Cuartel Silva Palma, para mantener privados de libertad a los detenidos ilícitamente e interrogarlos bajo sometimiento a torturas y apremios físicos y psicológicos, correspondiendo en la sentencia determinar cuál es la exacta contribución de cada uno de los encausados en la conducta delictiva reprochada. Por otra parte, la participación dolosa de los acusados ha quedado debidamente establecida según lo razonado en los considerandos undécimo, décimo tercero y décimo cuarto.

DECIMOCTAVO: Que, en cuanto a la alegación relativa a la obediencia forzada como eximente de responsabilidad, cabe desestimarla porque no se aprecia de qué modo podría darse la situación normativa que refiere, si los acusados han negado una de las conductas centrales del tipo penal materia de la acusación, esto es, la aplicación de reiteradas y graves torturas y apremios físicos y psicológicos a quienes se encontraban encerrados tanto en la Academia de Guerra Naval como en el Cuartel Silva Palma, menos han argumentado que la ejecución de esa conducta derivó de una instrucción precisa de un superior, todo lo cual hace desvanecer la defensa.

DECIMONOVENO: Que, en relación a la defensa concerniente a la falta de elementos del tipo penal, cabe señalar que el ordenamiento jurídico procesal penal anterior a la Reforma Procesal Penal también consideraba la privación de libertad como una medida excepcional, tendiente a asegurar la acción de la justicia, exigiendo como requisito previo la emanación de una orden dictada por la autoridad competente, y en ciertos casos, por civiles para el solo hecho de poner al detenido a disposición de la justicia. Asimismo, el estatuto del detenido exigía que el detenido tenía derecho a imponerse de la causa de su privación de libertad, a ser mantenido en lugares especialmente habilitados para ello, a que los plazos de detención eran muy limitados, a cuyo término era puesto en libertad o bien puesto en prisión preventiva. Posteriormente, frente a la prisión preventiva, también

surgían otros derechos relativos a su defensa, a impugnar el auto de procesamiento y pedir la libertad provisional, a estar en un recinto penitenciario bajo custodia, a ser visitado, entre otros. De especial preocupación normativa se contemplaba el derecho del inculpado, procesado o reo y detenido, en que la declaración de éste sea sin coacción, amenazas ni promesas. Por ello, al contrario de lo señalado por la defensa de los acusados, no existía norma procesal alguna que facultara, ni aun bajo circunstancias extraordinarias, la detención, ni prisión de personas fuera de dicho estatuto, ni particularmente que se habilitara la aplicación de torturas en la persona de quienes estaban privados de libertad. En consecuencia, puede predicarse claramente que la figura típica que recoge la situación fáctica acreditada es la del secuestro con grave daño, contemplado en el artículo 141 del Código Penal que, al momento de los hechos, se encontraba previsto en su inciso tercero, por lo que cabe desestimar la alegación de la defensa. En cuanto al elemento típico consistente en el “grave daño” también se encuentra debidamente acreditado, con arreglo a lo razonado en el considerando tercero de este fallo, el que se da por reproducido en lo pertinente.

VIGESIMO: Que en cuanto a que, a los empleados públicos, encargados del cumplimiento de las órdenes de detención o arresto, en el cumplimiento de estas, eventualmente pudieran haberse excedido, no les es aplicable las disposiciones del artículo 141 relativo al secuestro, cabe desestimar tal alegación puesto que la norma referida comprende un sujeto activo amplio, pudiendo cometerse este delito por un funcionario público perteneciente a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, cabe señalar que tampoco podrían calificarse los hechos como detención ilegal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 y 150 N° 2 del Código Penal, ya que se ha establecido que la víctima fue mantenida encerrada en el Cuartel Silva Palma de una manera ilícita y sin autorización legal que avalara las graves torturas que sufrió el detenido y el tiempo que permaneció detenido sin que se le pusiera a disposición de la Fiscalía Naval. De este modo, los hechos establecidos no se ajustan a la situación de las referidas disposiciones del 150 del Código Penal, pues el delito de detención ilegal presupone que la privación de libertad esté revestida “de un mínimo de legalidad”. Por el contrario, el grupo que actuó integrando el Servicio de Inteligencia Naval fue un organismo que actuó por encima de la ley, y los miembros que actuaban, tanto en la aprehensión o en el posterior encierro de las víctimas, lo hacían en esa misma línea, para posteriormente interrogarlos bajo torturas atroces causándoles grave daño.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD
PENAL. -

VIGESIMOPRIMERO: Que la defensa de los acusados solicitó que se consideren las siguientes circunstancias atenuantes de responsabilidad penal:

En primer término, invoca la atenuante contemplada en el artículo 103 del Código Penal, llamada también media prescripción o prescripción gradual. Manifiesta que esta atenuante es aplicable en las situaciones en que se hace necesario aminorar la pena teniendo en consideración especialmente la cantidad de años transcurridos desde la perpetración del ilícito, la situación de convulsión en que este pudo haberse cometido y la calidad de subalterno de los hechores, todo lo cual permite considerar el hecho revestido de dos o más atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante permitiéndole al juez aplicar la pena con mayor justicia.

En segundo lugar, alega a favor de sus representados la circunstancia atenuante del artículo 211 del Código de Justicia militar como muy calificada, en atención a que el actuar de ellos para proceder a la supuesta detención proviene de una orden emanada de un superior jerárquico habida consideración de que sus representados eran suboficiales; una orden militar, la cual no es susceptible de ser discutida o cuestionada en la verticalidad de mando que opera en las instituciones armadas y que evidentemente era relativa al servicio.

A continuación, alega la atenuante establecida en el inciso segundo del artículo 214 del Código de Justicia Militar que señala: “el inferior que fuera del caso de excepción a la que se refiere la parte final del anterior, se hubiere excedido en su ejecución o si, tendiendo la orden notoriamente a la perpetración de un delito, no hubiere cumplido con la formalidad del artículo 335 será castigado con la pena inferior en un grado al asignada por la ley al delito”.

Finalmente alega la irreprochable conducta anterior contemplada en el artículo 11 número 6 del Código Penal.

Hizo presente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA, señalando que sus representados son todas personas mayores que adolecen de las enfermedades propias de su edad.

VIGESIMOSEGUNDO: Que, corresponde desestimar la solicitud de aplicación del artículo 103 del Código Penal. A este respecto, cabe tener presente que la normativa del derecho internacional humanitario contenida principalmente

en los Convenios de Ginebra, ratificados por Chile, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional. En el mismo sentido, el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con una pena proporcional al crimen cometido. A la misma conclusión se llega considerando el principio de imprescriptibilidad consagrado a nivel de Derecho Internacional Humanitario de carácter consuetudinario, manifestado en diversos cuerpos normativos, tales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total. Por otro lado, la Excma. Corte Suprema ha fallado reiteradamente acerca de la improcedencia de aplicar la prescripción gradual en los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad. Ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurre en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena. Sin embargo, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes.

VIGESIMOTERCERO: Que, respecto al cumplimiento de órdenes, ello se asila en lo que dispone al efecto el artículo 211 del Código de Justicia Militar, y también en lo que disponen ambos incisos del artículo 214 de ese mismo texto legal. Que, sin embargo, esta normativa es inaplicable a la situación de autos, toda vez que los acusados, junto con señalar que no reconocen participación en las torturas infligidas a la víctima, tampoco han señalado haber recibido alguna orden de un superior. También se exige para estos efectos, que el superior manifieste positivamente haber dado la correspondiente orden, lo cual no ocurre en la especie. Que, tampoco es aplicable el inciso 1° del artículo 214 del Código ya

mencionado, toda vez que en ningún caso el superior es el único responsable y menos que exista concierto entre ellos. Que, por último, tampoco se da el supuesto del inciso segundo de esa disposición, pues no existe constancia alguna que se impartió una orden específica para la perpetración del delito. Que, en definitiva, en la especie no ha operado ningún mecanismo que permita atenuar la responsabilidad por esta vía, desde el momento en que el acusado no reconoce participación, pues ésta última ha sido establecida a través de presunciones judiciales. Tampoco puede darse lugar como eximente incompleta por no concurrir ninguno de los requisitos en la eximente. En virtud de todo ello, esta petición también será rechazada.

VIGESIMOCUARTO: Que, favorece a los acusados la irreprochable conducta anterior, de acuerdo con el extracto de filiación y antecedentes que rola a fojas 331 Y 311, relativos a los acusados Riquelme y Reyes, respectivamente, y conforme a lo establecido en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, pues ella está referida a hechos anteriores a los que han sido objeto de la acusación en esta causa.

PENALIDAD APLICABLE. -

VIGESIMOQUINTO: Que, la defensa efectúa consideraciones respecto a la penalidad aplicable, señalando que respecto de la condena por el delito de secuestro tendrá que ser en su condición de secuestro simple correspondiendo a una penalidad de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados, sin perjuicio de aplicar las circunstancias atenuantes que correspondan en la especie. En relación con el delito de aplicación de tormentos, afirma que tiene asignada una pena de presidio menor en su grado máximo, aplicando las atenuantes que en derecho correspondan.

VIGESIMOSEXTO: Que, sobre tales argumentaciones debe estarse a lo ya razonado en cuanto los supuestos fácticos que se han tenido por acreditados y en que a los acusados les ha correspondido una participación dolosa en el tipo penal previsto en el artículo 141 incisos tercero del Código, vigente a la fecha de comisión de los hechos.

VIGESIMOSEPTIMO: Que, los acusados Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Juan de Dios Reyes Basaur resultan responsables como autores del delito de secuestro con grave daño, ilícito establecido en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, vigente a la fecha de comisión de los hechos, el que tiene contemplado una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Teniendo presente que los acusados poseen la atenuante de irreprochable conducta anterior

y conforme lo previene el inciso segundo del artículo 68 del Código del ramo, no se aplicará el grado máximo. En lo concerniente a la penalidad precisa, este Tribunal lo hará en el mínimo, por no existir un factor adicional para tener en consideración, aparte de los propios que se han recogido para establecer el delito y la participación.

VIGESIMOCTAVO: Que, en cuanto a la petición que se le concedan los beneficios contemplados en la Ley 18.216, no se acogerá, pues ellos resultan improcedentes atendida la extensión de la pena privativa de libertad que se les impondrá.

VIGESIMONOVENO: Que, por último, la defensa de los acusados solicita que la pena se cumpla en sus domicilios, fundado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, lo cual resulta improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad

En mérito de lo expuesto, disposiciones legales que se han citado y atendido lo dispuesto en los artículos 1, 5, 11 N° 6, 14, 18, 24, 28, 68 y 141 del Código Penal; artículos 10, 42, 81, 108, 109, 110, 456 bis, 457, 484, 488, 500 y 533 del Código de Procedimiento Penal, **SE DECLARA:**

I.- Que **no se hace lugar** a las excepciones de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción penal y de amnistía opuesta por la defensa de los acusados.

II.- Que se absuelve a los acusados como autores del delito de aplicación de tormentos por la consideración expresada en el fundamento cuarto de este fallo.

III.- Que se **CONDENA** a **VALENTIN EVARISTO RIQUELME VILLALOBOS Y JUAN DE DIOS REYES BASAUR** como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Miguel Flores Eloz, hecho ocurrido a partir del mes de septiembre de 1974, a cada uno de ellos, a la pena de **CINCO AÑOS Y UN DIA** de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

IV.- Que los condenados, atendida la magnitud de la condena, deberán cumplir efectivamente con su pena en el recinto penitenciario correspondiente, no haciéndose lugar a la solicitud de la defensa en orden a que el cumplimiento se haga efectivo en su domicilio, atendido que dicha modalidad no se encuentra

contemplada en la ley, sirviéndole de abono en todo caso el tiempo que permanecieron privados de libertad con motivo de esta causa, esto es, entre el 25 de noviembre de 2021, según consta en las actuaciones de fojas 292 en cuanto a Riquelme y en fojas 294 en lo concerniente a Reyes 580 y el 3 de diciembre de 2021 con arreglo a las piezas que rolan a fojas 309 vuelta.

La pena la cumplirán a continuación de las impuestas en las causas Rol 144.133-2013 y Rol 948-2006, ambas de este Tribunal.

Notifíquese personalmente a los sentenciados. Respecto a los apoderados de las partes, notifíqueseles en la secretaría o a través de Receptor Judicial.

Dese cumplimiento en su oportunidad con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese, si no se apelare.

Rol N° 1-2016 DDV

**DICTADA POR DON MAX ANTONIO CANCINO CANCINO,
MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA PARA CONOCIMIENTO Y
JUZGAMIENTO DE CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1973 Y 1990 EN LA REGION DE
VALPARAÍSO.**

En Valparaíso, a diez de abril de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.